

**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**MAESTRÍA EN DERECHO**

**CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**



**TESIS**

**“El Tribunal Constitucional y su exclusiva y efectiva facultad de  
revisión a las resoluciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de  
Elecciones”**

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE  
MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN  
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

**Investigador:**


**Bach. Fernando Manuel Rojas Calderón**

**Asesor:**

**Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo**

**Lambayeque, 2021**

**“El Tribunal Constitucional y su exclusiva y efectiva facultad de  
revisión a las resoluciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de  
Elecciones”.**



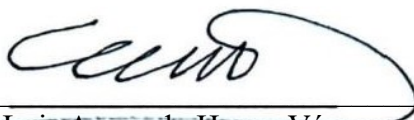
Bach. Fernando Manuel Rojas Calderón  
Autor



Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo  
Asesor

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  
para optar el Grado de: MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

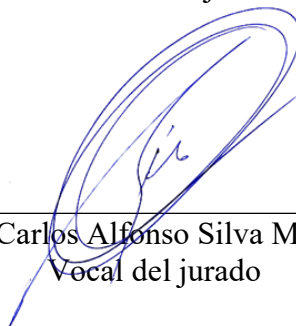
Aprobado por:



Dr. Luis Armando Hoyos Vásquez  
Presidente del jurado




Dr. Rafael Hernández Canelo  
Secretario del jurado



Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz  
Vocal del jurado

Lambayeque, 2021

 <b>UNPRG</b> UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	<b>ESCUELA DE POSGRADO</b> <i>M.Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1 de 3	

## ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las 11:00 a.m. del día miércoles 04 de agosto de 2021, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°376-2021-EPG, de fecha 10 de junio de 2021, conformado por:

Dr. LUIS ARMANDO HOYOS VASQUEZ	Presidente
Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO	Secretario
Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ	Vocal
Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO	Asesor


Para evaluar el informe de tesis del tesista FERNANDO MANUEL ROJAS CALDERON, candidato a optar el grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD con la tesis titulada "EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SU EXCLUSIVA Y EFECTIVA FACULTAD DE REVISIÓN A LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°552-2021-EPG de fecha 23 de julio de 2021 que autoriza la Sustentación Virtual del Informe de Tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó al candidato a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole 30 minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición del candidato, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de Tesis realizada por el

Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

 <b>UNPRG</b> <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	<b>ESCUELA DE POSGRADO</b> <i>M.Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1 de 3	

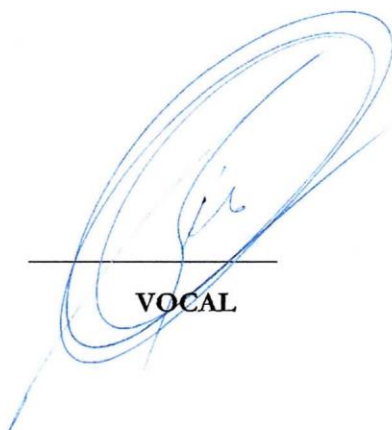
candidato, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con puntos 17, equivalente a bueno, quedando el candidato apto para optar el Grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOVERNABILIDAD.

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

Siendo las 12:50 p.m. se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.

  
**PRESIDENTE**

  
**SECRETARIO**

  
**VOCAL**

  
**ASESOR**





### **Constancia de originalidad de aprobación de tesis**

Yo, Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo asesor de tesis, revisor del trabajo de investigación del tesista Fernando Manuel Rojas Calderón, titulada "El Tribunal Constitucional y su exclusiva y efectiva facultad de revisión a las resoluciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones". Luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 9 % verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte de acuerdo a la Directiva para la evaluación de originalidad de los documentos académicos, de investigación formativa y para la obtención de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Guías de uso del Software de reporte de similitud TURNITIN, aprobado mediante Resolución N° 659-2020-R, de fecha 8 de setiembre de 2020, razón por la cual la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 25 de mayo de 2021.



**Freddy Widmar Hernández Rengifo**

**DNI 17450122**

**Asesor**

## **Dedicatoria**

A Dios, que me ha dado todo, la vida, mi familia y la fortaleza para cumplir cada uno de mis objetivos siempre con su dirección.

## **Agradecimiento**

A mi amada esposa Leyla Ivon por su constante apoyo; y, a mis hijas María Fernanda y Mía Annette por transmitirme su alegría y acompañarme día a día.

## Índice General

<b>Dedicatoria .....</b>	<b>5</b>
<b>Agradecimiento.....</b>	<b>6</b>
<b>Índice General.....</b>	<b>7</b>
<b>Resumen .....</b>	<b>8</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>9</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>10</b>
<b>Capítulo I Aspecto Metodológico .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Realidad Problemática.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Formulación del Problema. ....</b>	<b>13</b>
<b>3. Objetivos.....</b>	<b>14</b>
<b>4. Hipótesis. ....</b>	<b>14</b>
<b>5. Variables.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Tipo de investigación.....</b>	<b>14</b>
<b>7. Antecedentes de la Investigación.....</b>	<b>15</b>
<b>Capítulo II Marco Teórico.....</b>	<b>19</b>
<b>Sub Capítulo I El Jurado Nacional de Elecciones.....</b>	<b>19</b>
<b>Sub Capítulo II El Proceso de Amparo.....</b>	<b>23</b>
<b>Capítulo III.....</b>	<b>38</b>
<b>1. Tipo de Investigación.....</b>	<b>38</b>
<b>2. Métodos de investigación. ....</b>	<b>38</b>
<b>3. Diseño de contrastación.....</b>	<b>38</b>
<b>4. Población y Muestra.....</b>	<b>39</b>
<b>5. Técnicas de recolección de datos. ....</b>	<b>40</b>
<b>6. Procesamiento y análisis e interpretación de datos. ....</b>	<b>40</b>
<b>7. Resultados.....</b>	<b>42</b>
<b>Conclusiones.....</b>	<b>67</b>
<b>Recomendaciones.....</b>	<b>68</b>
<b>Referencias Bibliográficas .....</b>	<b>69</b>



## Resumen

Nuestra Carta Magna señala que el Jurado Nacional de Elecciones, en adelante JNE, Organismo Constitucionalmente Autónomo, ostenta la exclusividad de la función jurisdiccional electoral y por el otro, existe la alternativa que mediante una acción de amparo sea conocido por el Poder Judicial; asimismo, a través de la interposición del recurso de agravio constitucional puede ser conocido por el Tribunal Constitucional, instituciones que puedan reformar y/o modificar una resolución electoral transgresora de derechos fundamentales.

Respecto a esta situación, el nuestro supremo Tribunal Constitucional, en adelante TC, ha determinado en el Precedente Vinculante N.º 5854-2005/PA/TC, y en los Expedientes N.º 2730-2006-PA/TC; 5448-2011-AA/TC, 7247-2013-AA/TC, afirmando que *“hay fundamentos necesarios que no solo sustentan la viabilidad, sino la absoluta necesidad de que las resoluciones del JNE sean sometidas a un escrutinio de validez constitucional a través del proceso de amparo”*.

Cabe precisar que, el convocado a administrar justicia es el Poder judicial, este poder del Estado ostenta el mismo nivel jerárquico que el JNE, en ese sentido resulta incongruente que sean sus jueces, quienes estén facultados a conocer procesos de amparo contra resoluciones emitidas por el JNE, sin embargo, es así como hasta la fecha se ha venido desarrollando. El caso más conocido, en el cual ha intervenido el Poder Judicial, para conocer el amparo es el Caso Castillo Chirinos, justamente del ex alcalde de la Provincia de Chiclayo, cuyo acción llegó hasta el Tribunal Constitucional, quién garantizó sus derechos; por ello la presente investigación, desarrollará la factibilidad de los amparo en materia electoral sean tramitados ante el TC, quien deberá pronunciarse de manera definitiva, todo ello en virtud a que es el supremo interprete de la Constitución y el Organismo facultado para ejercer el Control Concentrado de la Constitucionalidad.

**Palabras Clave:** Función Jurisdiccional del Poder Judicial - Función Jurisdiccional electoral del Jurado Nacional de Elecciones - Tribunal Constitucional y Jurisdicción Constitucional - Control concentrado de la Constitucionalidad - Interpretación Constitucional.

## Abstract

The Political Constitution of Peru indicates that the National Elections Jury, a Constitutionally Autonomous Organism, has the exclusivity of the electoral jurisdictional function and, on the other hand, there is the possibility that through an amparo process it may be known by the Judicial Power, as well as Through the filing of the constitutional grievance appeal, institutions that can reform and / or modify an electoral resolution that it considers violates fundamental rights can be heard by the Constitutional Court.

Regarding this situation, the Constitutional Court has ruled in Binding Precedent No. 5854-2005 / PA / TC, and in the judgments passed in Case Files No. 2730-2006-PA / TC; 5448-2011-AA / TC, 7247-2013-AA / TC, stating that *“there are necessary foundations that not only support viability, but also the absolute need for JNE resolutions to be subject to constitutional validity scrutiny through the amparo process”*.

It should be noted that, although the judiciary is in charge of administering justice, it has the same hierarchical level as the JNE, in that sense it is incongruous that its judges are the ones who are empowered to hear the actions of protection against the resolutions issued by JNE, however, is how it has been developing to date. The best known case, in which the Judicial Power has intervened, to hear the amparo is the Castillo Chirinos Case, precisely of the former mayor of the Province of Chiclayo, whose action reached the Constitutional Court, who guaranteed his rights; For this reason, the present investigation will develop the feasibility that the processes of protection in electoral matters are presented before the TC, who must pronounce definitively, all because it is the supreme interpreter of the Constitution and the Body empowered to exercise Concentrated Control of Constitutionality.

**Key words:** Jurisdictional Function of the Judiciary - Electoral Jurisdictional Function of the National Election Jury - Constitutional Court and Constitutional Jurisdiction - Constitutional control concentrated - Constitutional Interpretation.

## **Introducción**

La presente tesis está encauzada a determinar si el Proceso de amparo contra resoluciones emanadas por el JNE debe ser conocido por el Poder Judicial, en adelante PJ, o sólo tramitarse ante el TC, con la finalidad de clarificar si el pronunciamiento por parte del Poder Judicial vulnera la independencia del JNE, por cuanto ambos organismos tienen competencias exclusivas.

A fin de esquematizar esta investigación, en el Capítulo I se analizará el aspecto metodológico, delimitándose realidad problemática, problema, objetivos, hipótesis, variables, tipo de investigación y antecedentes de la investigación.

En el Capítulo II, referido al marco teórico, se examinará funciones y aspectos esenciales concernientes al JNE la competencia, al proceso de amparo y al amparo electoral, así como al PJ y TC.

En el Capítulo III, concerniente al trabajo de campo, se realizará el procesamiento de la información y la discusión de los resultados, se efectúa un análisis de la irrevisabilidad de las Resoluciones del JNE por el PJ; análisis de la Supremacía del Tribunal Constitucional frente a cualquier controversia en la que se discuta violación de Derechos fundamentales; análisis de la Sentencias emitidas por el TC respecto a amparos contra resoluciones de materia electoral que estiman la demanda de amparo y la presentación del modelo teórico. Finalmente se expondrán las conclusiones y recomendaciones.

Invitamos al lector, a conocer los argumentos por los cuales, solo el TC, al ser el intérprete máximo de nuestra Carta Magna, tiene la potestad de conocer el amparo contra resoluciones del JNE.

## **Capítulo I**

### **Aspecto Metodológico**

#### **1. Realidad Problemática.**

Desde la creación del Tribunal Constitucional, este ha tenido su propia Ley Orgánica la cual lo consagra como sumo interprete de la Constitución, asimismo tiene atribuida la facultad de legislar a través de los Precedentes Vinculantes, configurándose así un Tribunal Constitucional Peruano sólido capaz de legislar y de excluir las normas que vulneran los preceptos constitucionales.

Este supremo Tribunal tiene la mayor competencia nacional, ubicándose en la cúspide de nuestra pirámide normativa, siendo que sus decisiones no están sujetas a revisión por ningún poder público a nivel nacional, sólo siendo recurribles a nivel supranacional, como lo dispone el art. 205 de la Constitución y 114 del Código Procesal Constitucional - en adelante CPConst.-.

Asimismo, el poder constituyente determinó competencias para la administración de justicia, siendo que declaró competente - jurisdiccionalmente - al Poder Judicial para administrar justicia, excluyendo a la jurisdicción militar y arbitral (art. 139 de la Constitución), así también dispuso que el JNE administra justicia en materia electoral (art. 178 de la Constitución), y preside el sistema electoral integrado a su vez por RENIEC y ONPE.

La Constitución en su art. 142° establece: “no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral”; lo cual claramente implica que éstas se encuentren exoneradas de control constitucional – en sede judicial -; siendo así solo el Tribunal Constitucional es competente para efectuar un juicio de constitucionalidad a las resoluciones emitidas por el JNE a fin de determinar si vulneran derechos fundamentales en virtud de lo cual emitió precedente vinculante: “(...) Toda interpretación de los artículos 142 y 181 de la Constitución que realice un poder público en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales, se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, es una interpretación inconstitucional” (Exp.

N°5854-2005- PA/TC - Caso Lizana Puelles); sin embargo, al ser un proceso de amparo, la primera y segunda instancia son conocidas actualmente por el Poder Judicial.

Consecuentemente, cada vez que el JNE, o algún ente del sistema electoral, emitan resoluciones vulneradoras de algún derecho fundamental, la demanda de amparo interpuesta contra ella será admitida. El TC ha emitido pronunciamiento en diversos procesos de amparo en materia electoral en los casos arribando a la sentencia que declaró inconstitucional la Ley N°28462 que prohibía la existencia del amparo electoral. (Exp. N°00007-2007-PI/TC).

Así también tenemos el Caso FONAVI, Exp. N°5180-2007-PA/TC, donde el TC determina la anulación de una resolución por estar viciada al irrogarse competencia no correspondiente, sujetándose a un proceso de referéndum, vía consulta popular, la devolución de los aportes al FONAVI; evidenciándose que el JNE se rehusó a acatar la sentencia, aduciendo la afectación a la estabilidad presupuestal; estando a ello, el Gobierno Central formó una Comisión Multisectorial para resolver esta problemática.

Desde el año 2005, el TC Peruano emitió el Precedente Vinculante 5854-2005/PA/TC, y sentencias en los Exp. N.º 2730-2006-PA/TC; 5448-2011-AA/TC, 7247-2013-AA/TC ha establecido que “(...) hay fundamentos necesarios que no solo sustentan la viabilidad, sino la absoluta necesidad de que las resoluciones del JNE sean sometidas a un escrutinio de validez constitucional a través del proceso de amparo”.

A la fecha, el amparo electoral, es conocido por el Poder Judicial en primera y segunda instancia, y sólo ante la admisión del Recurso de agravio constitucional (en adelante RAC), llega a ser conocido por el TC; sin embargo el PJ no tiene como funciones el revisar las resoluciones emitidas por el JNE, máxime si por disposición constitucional es un ente autónomo, con competencias jurisdiccionales específicas, diferentes a las otorgadas al Poder Judicial; en ese contexto, el único que tiene la facultad de revisar las resoluciones del JNE es el TC, puesto que es “el sumo interprete de la Constitución, capaz de conceder seguridad jurídica y unidad normativa al Derecho Constitucional Electoral y guardián de la obediencia a la Constitución y a los derechos fundamentales que ella, y los tratados y/o convenios suscritos y vigentes,

garantizan. Argumento señalado en la Resolución de 21 de enero de 2014, en el Exp. N° 07247-2013-PA/TC”; sin embargo, actualmente el proceso de amparo electoral es tramitado ante el Poder Judicial.

En el ámbito nacional, se ha pronunciado Alejandro Rospigliosi Vega, manifestando que en otros sistemas electorales “la legislación admite que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional administren justicia electoral, citando el caso Bush v. Agor, - elecciones presidenciales de los EEUU”.

Así también se han pronunciado Samuel Abad Yupanqui (2002), al señalar la excepcionalidad del amparo electoral, pues la competencia constitucional obliga a los órganos a adecuar su accionar a la Constitución y la primordial dignidad de las personas en la cual se fundan todos sus derechos, comentando que, en el 2000, el JNE se parcializó a favor de la candidatura de Fujimori. Ergo, el amparo debe centrarse a la determinación de vulneración o no de los derechos, sin entrometerse en el proceso electoral.

Bajo otra perspectiva, Enrique Javier Mendoza Ramírez (2007), señala que, al permitirse la revisión a estas resoluciones, se atenta contra su autonomía, siendo necesario un fuero especial, por lo cual se puede arribar a que los presidentes o alcaldes sean designados por el TC o por la CDH en San José. Asimismo, precisa que el JNE si garantiza el respeto a los derechos fundamentales

Ante estas diversas posiciones, la presente investigación, busca determinar si el Poder Judicial debe conocer el proceso de amparo en materia electoral, o dicha facultad debe estar reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional.

## **2. Formulación del Problema.**

¿El Proceso de amparo contra resoluciones jurisdiccionales emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones debe ser conocido por el Poder Judicial, o sólo tramitarse ante el Tribunal Constitucional?

### **3. Objetivos.**

#### **Objetivo General**

Determinar si el Proceso de amparo frente a resoluciones jurisdiccionales electorales debe ser conocido por el Poder Judicial, o sólo tramitarse ante el Tribunal Constitucional.

#### **Objetivos Específicos**

1. Identificar la exclusividad de la función jurisdiccional electoral del JNE.
2. Analizar las causales de Procedencia del amparo frente a resoluciones jurisdiccionales del JNE.
3. Explicar la falta de competencia del Poder Judicial para conocer el amparo electoral.
4. Determinar que la exclusividad del Tribunal Constitucional para tramitar el amparo electoral.

### **4. Hipótesis.**

El Proceso de amparo contra resoluciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones debe ser tramitado exclusivamente por el Tribunal Constitucional dada su efectiva facultad de control constitucional.

### **5. Variables.**

Variable independiente: El proceso de amparo contra resoluciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones.

Variable Dependente: Debe ser tramitado exclusivamente por el Tribunal Constitucional dada su efectiva facultad de control constitucional.

### **6. Tipo de investigación.**

Según Hernández Sampieri (2019), la presente investigación se cataloga como cualitativa. Analizaremos las sentencias de amparo que han sido declaradas fundadas,



así como el precedente vinculante que precisa la competencia del Tribunal Constitucional, no existiendo zonas exentas del TC.

Así mismo, el diseño es de teoría fundamentada, mediante la cual sostendremos que el único organismo competente para tramitar los amparos en materia electoral es el Tribunal Constitucional. Según Hernández y Mendoza (2019), citando a Taylor y Francis, “se efectúa una elucidación a un fenómeno, proceso, acción o interacciones en un determinado contexto y desde diversas perspectivas”. (p.526)

Asimismo, se describirá tres instituciones que integran el ordenamiento jurídico: JNE, como organismo autónomo; TC como ente autónomo que resguarda la Supremacía de la Constitución y Poder Judicial como Poder del Estado; nuestro propósito es describir la situación actual, por lo cual necesitamos considerable conocimiento del Bloque de la Constitucionalidad. Se explicarán cada una de las atribuciones que tiene el JNE, el PJ y el TC, así como la procedencia del amparo contra resoluciones jurisdiccionales emitidas por el JNE, finalmente arribaremos a la presentación del modelo teórico que determine la exclusiva y efectiva facultad de revisión a las resoluciones jurisdiccionales del JNE.

## **7. Antecedentes de la Investigación.**

Como primer antecedente Internacional encontramos a la tesis de doctorado, presentada por Carlos Mena Adame (2002), denominada “La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional”, presentada ante la Universidad Autónoma de México, esta tesis se refiere estrictamente a la Justicia Constitucional en la Ciudad de México, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Tribunal Constitucional, pues asume las funciones de este, es decir es la máxima Instancia en materia Constitucional (además de sus propias competencias); la tesis que estoy realizando desarrollara que al encontrarse, el control concentrado, en potestad del Tribunal Constitucional, es este la instancia que decide la cosa juzgada constitucional.

También encontramos como antecedente a la tesis de maestría, realizada por María Fernanda Sánchez Díaz (2008), denominada “El tribunal constitucional como protector

permanente de la supremacía constitucional” presentada ante la Universidad Autónoma de México.

La citada tesis señala al Tribunal Constitucional siendo garantizador de la primacía constitucional, haciendo referencia al Tribunal Constitucional Español, refiriendo que el Poder Judicial Mexicano viola derechos fundamentales y por ello considera necesaria la existencia de un Tribunal Constitucional en México, señalando a su vez la poca aplicación del control difuso en la Ciudad de México. La tesis que pretendo exponer señala que el PJ ejerce el control difuso, pero el Tribunal Constitucional Peruano es el organismo que ejerce el control concentrado de la Constitucionalidad, y por lo tanto, será el único organismo constitucionalmente autónomo, capaz de verificar la garantía del debido proceso en materia electoral.

En investigación nacional, citamos a Adrianzén Carreño, Javier Ildefonso (2015), en su tesis “Fundamentos del Tribunal Constitucional para anular las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones”, investigación cualitativa, que señala que el Tc anula fallos del JNE, cuando este actúa fuera de sus competencias como el caso de la vacancia de alcaldes distritales o provinciales que a tenor del autor no es materia electoral, argumentando que los principios que vulneró y se han visto corregido por el TC, son: “la separación de poderes (art. 43° de la Carta Magna), presunción de inocencia (art. 2° inc. 24) e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, impidiendo a la autoridad inmiscuirse en causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en sus atribuciones (art. 139° inc. 2); participar en la vida política del país (art. 2° 17) y ser elegido representante (art. 31°); observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional (art. 139° 3)”;

ergo el TC no revisa lo decidido en materia electoral, sino sólo lo que está fuera.

La presente tesis, efectuará un análisis a las resoluciones mediante las cuales el TC, Se ha pronunciado en materia electoral, considerando la vacancia dentro de la misma; ello con la finalidad de determinar el control constitucional que realiza nuestro supremo tribunal.

Así también citamos a Valencia Cahuaya, Wendy Helen (2017), en su tesis “Necesidad de un Amparo Electoral para el fortalecimiento de la Jurisdicción Electoral

Peruana”, considera que, de efectuarse un amparo electoral dentro de un cronograma electoral, sus etapas deben ser más céleres, por otro lado indica que las resoluciones del JNE no pueden ser interpretadas fuera de la Constitución, ni emitidas vulnerando derechos, por lo cual admite la revisión de resoluciones del JNE, considerando la no existencia de exclusiones de Control Constitucional.

En ese sentido, esta tesis coincide en la inexistencia de zonas exentas de control constitucional, pero en este caso, al ser una “revisión de las resoluciones del JNE” el organismo idóneo únicamente es el TC, “a cargo del control concentrado de la Constitucionalidad”.

Como antecedente también encontramos la tesis de José Humberto Ruíz Riquero (2012), presentada ante la Univ. Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Esta Tesis que tiene un contenido muy amplio y detallado respecto al Tribunal Constitucional considera la existencia de la Supremacía del mismo, pero añade que no se menoscaba la función del Poder Judicial, pues si considera necesaria la existencia del Tribunal Constitucional al referir que este es el único que garantiza los Derechos fundamentales.

La tesis que sustentaré, desarrollará la Supremacía de las decisiones del TC, máxime si no existen zonas exentas de control constitucional, por lo cual el TC, puede revisar las resoluciones del Poder Judicial, así como del Jurado Nacional de Elecciones.

En nuestro país la Constitución tiene supremacía sobre cualquier norma jurídica, asimismo, los derechos humanos influyen en el ejercicio del poder. Siendo deber de los jueces y de los miembros del TC potenciar su ejercicio y fundamentar sus decisiones en los mismos.

Por ende, la interpretación que emite el TC como supremo intérprete constitucional, señalada en el Exp. N°. 5854-2005-AA de 8 de noviembre de 2005, precisa:

*“(…) toda interpretación de los artículos 142 y 181 de la Constitución que realice un poder público, en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales, se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, es una interpretación inconstitucional. Consecuentemente,*

*toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales, la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente.*

*En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst., este criterio normativo constituye precedente vinculante para todos los poderes públicos.*

*Todo juez y tribunal de la República —sea que realice funciones estrictamente jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales—, se encuentra vinculado por este criterio, bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y Primera Disposición Final de la LOTC)”.*

De igual forma, el TC ha enfatizado:

*“la posibilidad de ejercer control constitucional a las resoluciones del JNE que resulten contrarias a los derechos fundamentales no sólo emerge de una adecuada interpretación de la Carta Fundamental, sino que se encuentra expresamente concretizada en una disposición del Código Procesal Constitucional”*

Según Donayre (2010), en Perú, como en otros países, el TC tiene superioridad para determinar si el accionar de cualquier entidad o funcionario se ajustó a sus competencias y atribuciones, como lo es el JNE; y está obligado a tutelar, los derechos fundamentales y la supremacía constitucional; siendo así el control constitucional a las resoluciones del JNE es ineludible. A propósito de ello, conviene resaltar que las decisiones del TC no pueden ser revisadas en instancia nacional, siendo que la única forma de cuestionarlas es a nivel internacional.

El Tribunal Constitucional, en las sentencias N.º 2730-2006-PA/TC- Lambayeque, N.º 5854-2005-PA/TC- Piura, y N.º 2366-2003-AA/TC-Ica, precisó que dentro de un Estado Constitucional no es factible la existencia de zonas excluidas de control.

Estando a ello, si un ente constitucional, estatal o privado: intimida, agrede o vulnera el bloque de la Constitucionalidad, el TC tiene competencia para resolver aquella situación mediante el proceso de amparo, lo cual incluye al JNE, pues todos los organismos se encuentran sujetos a la Constitución.

## **Capítulo II**

### **Marco Teórico**

#### **Sub Capítulo I**

##### **El Jurado Nacional de Elecciones**

Según establece la Constitución y su propia ley orgánica, es un organismo constitucionalmente autónomo con competencia a nivel nacional, preside el sistema electoral, el cual está integrado también por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC y la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE. “El Pleno es su máxima autoridad y está integrado por cinco miembros elegidos de diferentes estratos: la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima, los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas. Su conformación colegiada y la interdisciplinariedad en su elección garantizan su independencia e imparcialidad”.

El JNE, autoridad suprema en ámbito electoral, máximo intérprete de sus propias normas, tiene capacidad de fiscalización y gestiona su propio presupuesto; sus resoluciones son cosa juzgada, no pudiendo cuestionarse ante el Poder Judicial, su principal obligación es velar por la legalidad del sufragio y tiene funciones administrativas como el registrar a las organizaciones políticas entre otras.

La Visión del JNE es ser un “Organismo electoral transparente, eficiente y moderno, que promueve una democracia estable, para un país próspero y sostenible”. Su Misión es “Administrar justicia electoral, fiscalizar procesos electorales, impartir educación electoral y actualizar y custodiar el Registro de las Organizaciones Políticas; garantizando el respeto de la voluntad popular, fortaleciendo la institucionalidad democrática de forma transparente, eficiente y moderna”.

En relación a las Funciones del JNE, es menester precisar:

- a) En época electoral; el JNE verifica y fiscaliza el padrón electoral, en el cual se consignan a los ciudadanos capaces de elegir y ser elegidos, dan conformidad al mismo, verifican el sistema tecnológico manejado por ONPE para la contabilización de votos y

resultados, ello a fin de que la voluntad ciudadana sea manifestada al proclamar las autoridades electas.

b) En época no electoral; se avoca a la educación cívica electoral dirigido a los educandos, realiza convenios interinstitucionales generando valor cívico, y se avoca a tramitar la inscripción de las organizaciones políticas en el Registro de Organizaciones Políticas - ROP, el cual funciona constantemente a excepción de seis meses antes y tres meses posteriores a algún proceso electoral. Asimismo, el Pleno del JNE practica labores jurisdiccionales, asesora fiscaliza y supervisa votaciones establecidas por la sociedad civil.

### **1. Función Jurisdiccional Electoral.**

El Artículo 178° de la Carta Magna señala que el JNE, debe: “(...)4. *Administrar justicia en materia electoral (...)*”.

El acto jurisdiccional, en materia electoral, tiene como prerrogativa ser personal, aplicable y concreto, es emitido no sólo por el JNE, sino también por los otros integrantes del Sistema Electoral, y se rige en el principio de Equidad, congruencia, además de la exhaustividad.

Esta función tiene una peculiar naturaleza, y además de garantizar todos los derechos de la parte, en ella prima la participación política, siendo que existen plazos para la presentación de tachas a las candidaturas, vencido el cual, pese a acreditar una omisión de información o inclusión de información falsa, el JNE, no excluye al candidato, únicamente remite copias al ministerio público, quien ante la comprobación de información falsa puede excluirlo hasta un día antes de la elección.

Respecto a la neutralidad con la que deben actuar los candidatos y los funcionarios y servidores públicos, existe un propio proceso, el cual, adopta flexibilidad en su tramitación, a fin de dinamizar su resultado, atribuyéndose los JEE o JNE, el encausamiento de los solicitado por el titular de la Entidad o su representante.

El Pleno del JNE, máxima autoridad de administración de justicia electoral, se extiende a la administración de justicia procesos tramitados por RENIEC y ONPE. Nuestra Carta Suprema establece el art. 142 que: “*no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral*” siendo Sede Judicial el Poder Judicial.

Según Bernal (2016), los incidentes que conoce el JNE son los relacionados al sufragio en las elecciones, controversias en el padrón electoral, sistema de cómputo, actas observadas, y las apelaciones de resoluciones emitidas por la ONPE y la RENIEC.

Asimismo, mediante Rs. 0061-2018-JNE del 31 de enero de 2018, se eliminó el recurso extraordinario contra resoluciones del Pleno del JNE por afectación de los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, creado mediante Rs. 306-2005-JNE del 11 de octubre de 2005.

Conviene precisar que en el Compendio de legislación electoral actualizado a enero 2021, respecto a la eficacia de la Ley N° 26533, precisa que: “*El Jurado Nacional de Elecciones resuelve, en instancia final y definitiva, el recurso que se interponga contra las resoluciones que expidan la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sólo en asuntos electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares*”, así mismo efectúa precisiones al mandato constitucional de administrar justicia en materia electoral.

## **2. De las competencias del JNE y el Proceso Electoral**

El artículo 178° de nuestra Carta Magna, instituye como funciones del JNE, entre otras, hacer cumplir las normas electorales, verificar la legalidad del sufragio, inscribir a las organizaciones políticas e impartir justicia electoral, nos detendremos en esta última, vinculada al proceso electoral.

Respecto al proceso electoral, son etapas consecutivas con plazo perentorios y preclusorios, a fin de planear, organizar y ejecutar los procesos electorales establecidos en



su Ley Orgánica, para luego acreditar y proclamar a los ciudadanos electos; cuyo fin es la prolongación de la democracia.

Sus etapas, según Ley N.º 26859, son: la convocatoria (a fin de difundir en todos los ciudadanos la participación política), las actividades referentes al sufragio (cuyo objetivo es que se ejecute organizadamente, velando por la legalidad y resultados ajustados a la verdad);y, la proclamación de resultados en la cual se manifiestan los mismos y se acredita al ciudadano elegido popularmente.

Es así que, las competencias y funciones del TC, se ciñen a lo establecido en la Constitución y manifestándose generalmente en el proceso electoral, instaurado desde su convocatoria.

Según el Portal Institucional del JNE (2020), el Pleno del JNE, es competente para: Emitir Resoluciones que inscriben candidatos/as a la Presidencia, Vicepresidencias y Parlamento Andino; las que resuelven apelaciones y tachas a la inscripción de candidatos de elección popular a nivel congresal, regional y local; las que resuelven apelaciones sobre actas electorales observadas y actas impugnadas; las resoluciones que declaran nulidad total o parcial de las elecciones, referéndum y consultas populares; la proclama y entrega credenciales a los ciudadanos elegidos; las resoluciones que resuelven apelaciones contra resoluciones del ONPE, RENIEC, DNROP, y JEE; y las resoluciones de última instancia en vacancia y suspensión de autoridades; convocatoria a referéndum y consultas populares.

## **Sub Capítulo II**

### **El Proceso de Amparo**

#### **1. Proceso de Amparo**

Es la garantía constitucional, a través de la cual se protegen en su mayoría los derechos fundamentales y otros reconocidos en los tratados firmados por el Perú, siempre que se refieran al contenido constitucionalmente protegido del derecho humano.

Según Dueñas (2017), en relación a los antecedentes legales del amparo en el derecho latinoamericano, tuvo vital importancia la expedición de la Constitución de Yucatán en 1841 (México), puesto que, gracias a ella, se protegía a los particulares de eventuales vulneraciones a sus derechos fundamentales por parte de autoridades judiciales y estableciendo mecanismos resarcitorios de tales daños.

En nuestro país, el antecedente más remoto es “el amparo colonial que fue producto de la antigua legislación novoandina que provino del derecho de Indias” (Eto, 2013); y, que fue resultado de las constantes disputas entre indígenas y colonos por la posesión de tierras.

Como antecedente legislativo, citamos a la Constitución de 1933, en la cual el amparo no fue reconocido autónomamente, sino que se incorporó al Habeas Corpus, contemplando derechos individuales como sociales. Siendo que el Hábeas Corpus se ceñía a la defensa de la libertad individual y se extendió a más derechos (Abad, 2004).

Posteriormente, en la Constitución de 1979, el amparo se reconoció como institución autónoma, transformándose en un medio de tutela de los demás derechos consagrados en nuestra Carta Magna, restringiéndose el Hábeas Corpus al resguardo de la libertad personal; y luego mediante Ley N° 23506 y 25398, se desarrollan normativamente. (Dueñas, 2017).

De lo expuesto, deducimos que finalmente, con la Carta de 1979, el amparo obtenía su tan ansiada autonomía e independencia del Habeas Corpus para pasar a proteger derechos no tutelados por aquel.

Finalmente, la Carta Magna actual, siguió la línea de su antecesora, pero trató de limitar este proceso contra normas legales (Abad, 2015). De esta manera, se intentaba dejar fuera del ámbito de control del amparo a los preceptos normativos con rango de ley. Otro de los cambios introducidos fue la creación de una nueva LOTC.

Por último, desde la Carta Magna de 1993, es un instituto procesal que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales no protegidos por hábeas corpus, habeas data o cumplimiento. Se constituye en el principal mecanismo de tutela de los derechos constitucionales” (Landa, 2018, p. 111); siendo su finalidad restablecer en el ejercicio de sus derechos a la persona (Eto, 2013, p. 146). Su trámite se encuentra consagrado en Código Procesal Constitucional de 2004 y en los Precedentes Vinculantes del TC, dada su autonomía procesal, respecto al cual se pronunció en los Exps. N° 01875-2004-PA, 1417-2005-AA/TC, entre otros.

Respecto a la naturaleza jurídica del amparo esta trasciende a su regulación positiva, conteniendo dos peculiaridades básicas e inmanentes: *“La tutela especial de derechos calificados como ius-fundamentales, y la protección procesal de tutela de urgencia. El amparo persigue no solo la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de las personas; sino también comprende la tutela objetiva de la Constitución”*. (Eto, 2013).

El ámbito ‘subjetivo’ protege derechos fundamentales de los particulares ante cualquier vulneración o amenaza, y la objetiva, que lo consagra como instrumento para la defensa de los principios y valores acopiados en nuestra Carta Fundamental.

El Tribunal Constitucional refiere que únicamente procede por directa afectación de derechos fundamentales a fin de establecer si esta afectación es un acto u omisión reputada inconstitucional (STC Exp. N.º 1417-2005-AA/TC - f. 8), disposición que conlleva a que los Magistrados determinen prima facie el contenido esencial de derecho vulnerado que se ventila en el proceso de amparo, dado que sólo en este supuesto el amparo resultaría fundado, siendo el TC ha desarrollado el contenido esencial de sus derechos en las Stcias.

de los Exps. N° 0091-2005-PA-TC (08/01/2006), 3330-2004-AA/TC (10/08/2005), entre otras.

El amparo es un proceso urgente, dada la preminencia de los derechos que protege y la consecuente magnitud de consecuencias que devendrían si no se le da atención preferente, ergo debe primar la celeridad en la actuación de sus actos, Según Abad (2004) “es un proceso declarativo o de conocimiento, cuyo fundamento es la inseguridad o incertidumbre respecto a transgresión de un derecho por una autoridad, funcionario o persona, que debe ser precisada y remediada por la respectiva sentencia”.

Siendo así, la pretensión que no esté sostenida en vulneración al contenido esencial de los derechos fundamentales, no será suficiente para ser conocida en un amparo.

### **Principios rectores del proceso de amparo**

Respecto a los principios procesales determinados para el proceso de amparo, según Eto (2009) estos “*son pautas hermenéuticas que van a permitir al operador intérprete del amparo resolver cualquier aparente vacío en el régimen procesal, así como orientar la interpretación de las normas procesales que haga el juzgador. Estos principios procesales son: dirección judicial del proceso, principio de gratuidad en la actuación del demandante, principio de economía procesal, principio de inmediación y principio de socialización del proceso*” (p.27).

También, se identifican a modo de subprincipios “impulso procesal de oficio, adecuación de las formalidades y principio pro actione” Eto, (2019) y Landa (2018). Nos detendremos en este último.

A partir del principio pro actione, implica que ante la duda en el cumplimiento de los requisitos de procedencia, el juez debe preferir tramitar el proceso, es así que siempre se interpreta de la manera más beneficiosa a la persona. (Sentencia del Exp. 00252-2009-PA/TC, fundamento 7).

Conviene precisar que el TC, máximo revelador de nuestra Constitución, en el Exp. N.º 1417-2005-AA/TC, señala que es presupuesto de procedencia que se alegue afectado un derecho reconocido a rango Constitucional.

Respecto al “Amparo contra resoluciones judiciales”, el art. 200 inc.2 de la Constitución precisa: “*no procede el amparo contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular*”, *contrario sensu* procede frente a resoluciones emitidas en un proceso no regular en el cual se hayan afectado derechos procesales o sustantivos de las partes. Un supuesto excepcional es el denominado amparo contra amparo. Sin embargo, el TC, ha precisado que tiene sustento constitucional directo en el artículo 200 inciso 2 de la Constitución, porque un proceso constitucional también puede ser irregular. Así mismo, la jurisprudencia del TC ha determinado al arbitraje como jurisdicción de excepción, por lo tanto, un laudo arbitral sería equivalente a una sentencia judicial.

Del mismo modo se prevé que vía proceso de amparo se recurran resoluciones emitidas por la Junta Nacional de Justicia (ex CNM), amparo contra “actos de la administración pública”, amparo frente a los actos lesivos en estados de excepción, y el amparo contra resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, sobre el cual versa la presente investigación, y detallaremos en el acápite siguiente.

Así mismo, nuestro Cód. Proc. Constitucional actual señala, en su art. 5 las causales de improcedencia a esta acción, las cuales citamos a continuación:

*“No proceden los procesos constitucionales cuando:*

- 1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado;*
- 2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus;*
- 3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional;*
- 4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este Código y en el proceso de hábeas corpus;*
- 5. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable;*
- 6. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia; además, la inaplicabilidad de la citada norma.*
- 7. Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado;*
- 9. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel o relevancia constitucional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes;*

*10. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus”.*

Respecto al Órgano Jurisdiccional Competente, según la Ley N° 23506, usualmente el amparo se interponía en primera instancia al juez especializado civil del lugar donde se vulneró el derecho, el domicilio del afectado, o del infractor, y de manera particular, en el caso de orden judicial, se interpondría en la sala civil de la corte superior; estas normas buscaban limitar el conocimiento de estos procesos a los jueces respecto a sus pares; sin embargo, mucho se cuestionó la omisión de la obligación de respetar el turno.

Mediante la reforma dispuesta por la Ley N° 25011, con la finalidad de exigir el respeto al turno para determinar la competencia, creó un turno especial, el cual debía ser determinado por la sala plena de la Corte Superior del respectivo Distrito Judicial; estando a ello, se eliminó la elección de parte del juez”, respetándose el principio de Juez Natural.

Posteriormente, hubo otra reforma establecida por la Ley que modifica la Ley N° 23506 y la Ley N° 25398, referidas al Hábeas Corpus y Amparo, que en su art. 29, señalo un turno muy peculiar, pues además de la libertad en el lugar de interposición (afectación o domicilio del afectado o agresor), debía presentarse ante cualquier juez con turno programado hasta treinta días siguientes a la vulneración, con el mismo símil en caso de el amparo contra resoluciones judiciales.

Esta ley eliminó la exigencia de turno para presentar el amparo; ampliando el catálogo de jueces de turno permitiendo elegir al juez, pues contaba con treinta días para hacerlo.

Actualmente, según el art. 202 inciso 2 de nuestra Carta Fundamental y la cuarta disposición transitoria de la Ley Orgánica del TC, este Organismo conoce en última y definitiva instancia las resoluciones que deniegan los procesos tutelares (según la Constitución del 79 la conocía la Corte Suprema vía Casación), por ello el amparo se presenta ante juzgado Civil que corresponde, en segunda instancia en Corte Superior y en caso sea denegado en ambas instancias, irá sin mayor dilación al TC, eliminando tramitarse por la Corte Suprema, cuya vigencia fue precisada mediante la Ley N° 26446, incidiendo en su aplicación de manera posterior a la la vigencia de la LOTC.

La competencia según el art. 51° de la Ley N° 28237, *“es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y del proceso de cumplimiento el Juez civil*

*o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante”.*

Asimismo, el Código Procesal Constitucional, precisó que antes de interponer una demanda de amparo es conveniente agotar las vías previas administrativas que puedan existir, salvo algunas excepciones. Todo ello debe estar regulado mediante ley, además ceñirse al respeto, no solo de la ley sino del debido proceso; en virtud al principio *pro actione*, prefiriéndose la tramitación del amparo.

Por otro lado, existen razones para plantear demanda de amparo sin agotamiento de la vía previa, estas excepciones se encuentran en el artículo 46, citado textualmente:

*“Artículo 46.- Excepciones al agotamiento de las vías previas*

*No será exigible el agotamiento de las vías previas si:*

- 1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida;*
- 2) Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable;*
- 3) La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado; o*
- 4) No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución”*

La demanda debe ser presentada por el propio afectado o su representante. Incluso cualquier persona puede interponer la demanda en nombre de quien se encuentre imposibilitado de hacerlo, conforme establece el artículo 41° del cuerpo normativo citado; la demanda debe ser ratificada cuando el demandante se encuentre en posibilidad de hacerlo.

## **2. El Amparo Electoral**

A partir de 1995, se han presentado ante el TC variadas demandas de amparo frente a resoluciones del JNE: “Sentencias de Amparo N.º 0033-1995; 0971-1998; 1420-2002; 1804-2002; 2119-2002; 2346-2002; 2366-2003; 0252-2004; 0571-2004; 2668-2004-; 3981-2004; 4543-2004; 1365-2005; 4773-2005; 5396-2005; 5854-2005; 7632-2005; 2730-2006; 2746-2006; 3285-2006; 3317-2006; 6649-2006; 6901-2006”; estableciendo, el TC, que resultan procedentes cuando vulneres derechos fundamentales.



Es así que todo poder político que por acción u omisión se aparte del respeto al contenido esencial del derecho esta sujeto al control constitucional el cual efectúa nuestro TC, lo cual no exime al JNE.

Es necesario traer a colación la sentencia recaída en la acción de amparo N.º 02366 – 2003:

*“(…) aun cuando de los artículos 142.º y 181.º de la Norma Fundamental, se desprende que en materia electoral no cabe revisión judicial de las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, y que tal organismo representa la última instancia en tal asunto, dicho criterio sólo puede considerarse como válido en tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en forma debida o, lo que es lo mismo, compatibles con el cuadro de valores materiales reconocido por la misma Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de una forma que resulte intolerable para la vigencia de los derechos fundamentales o quebrante los principios esenciales que informan el ordenamiento constitucional, no sólo resulta legítimo sino plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando éste resulta viable en mecanismos como el amparo. (fundamento 4)”*

En ese contexto, mediante sentencia del Proceso de Inconstitucionalidad. N.º 0007-2007, se declaró inconstitucional el inc. 8) del art. 5º del CPC que establecía la improcedencia del amparo electoral, de lo que se colige que actualmente el TC es competente, pero en última instancia constitucional nacional.

Siendo así, el amparo en materia electoral, debe atenderse prontamente, con el objeto de que el posible daño, no sea irreparable; ergo, los plazos establecidos en el Código procesal constitucional para su atención, deben ser reducidos.

### **3. El Poder Judicial y el Amparo Electoral**

La Constitución Peruana vigente acopia la independencia, inamovilidad y unidad de jurisdicción como principios básicos en pro de la marcha del PJ.

Según nuestra Constitución se garantiza independencia del Poder Judicial con la prerrogativa de no movilidad de magistrados retribución económica digna y jerarquía, asimismo nombramiento en un proceso regular, como equilibrio se limita a los magistrados a participar en la vida política, afiliarse a un sindicato y ejercer su derecho a la

huelga (Artículo 153° CPP 1993); la inamovilidad que garantiza la permanencia en el cargo de los jueces, a fin de que decidan sin temor a ser separados y/o trasladados del cargo; sin embargo, consideramos que no hay unidad en la jurisdicción, pues determina la existencia de la militar y arbitral, y a cargo del JNE la administración de justicia en materia electoral; en el ámbito territorial la justicia ronderil en comunidades campesinas y/o nativas, y la JNJ – ex CNM- en la estimación y reelección de magistrados.

Es pertinente recordar, como ya lo han reseñado varios autores, que el sistema judicial es ineficaz, que el acceso de los jueces al sistema ha pasado por su peor crisis, existe desorganización institucional, hay falta de confianza en la ciudadanía, existencia de diversos sistemas que administran justicia como las comunidades campesinas y las rondas que colaboran con ellas, y peor aún el enquistamiento de la corrupción que fue descubierta desde el año 2018, han conllevado a que la ciudadanía tenga una percepción negativa en relación a la administración de justicia en el Poder Judicial y sus instancias.

No obstante, la potestad de administrar justicia es otorgada por el Pueblo, como Poder Constituyente originario, y posteriormente se convierte en derivado cuando es creado para gobernar, como en este caso es el Poder Judicial. La facultad de administrar justicia se encuentra plasmada en la Constitución vigente, y se conjuga con el control difuso que ejercen los magistrados: la constitucionalidad de las leyes. Ambos unifican la potestad que tiene el Poder Judicial y vincula a los Jueces quienes son los administradores de Justicia a poder apartarse de una norma que consideren inconstitucional, en base a su Criterio y con una adecuada motivación.

A continuación, el TUO de la LOP – D. S. N° 017-93-JUS precisa que: *“El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente ley”*.

Asimismo, su art. 4, establece: *“Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala (...)”*

Asimismo, el Art. 22 del Cód. Proc. Constitucional determina que las resoluciones judiciales dictadas por magistrados constitucionales tienen superioridad sobre las emitidas por otros, y su incumplimiento conlleva a responsabilidades de ley, además establece que se actúan conforme a sus propios términos por el juez de la demanda, es decir el juez las ejecuta.

Así también, según lo determinado en el precedente vinculante recaído en el proceso de amparo 5854-2005, y las sentencias de los procesos de amparo: 5396-2005; 2730-2006; 2366-2003; 05448-2011, entre otros, han sido conocidos por el TC, vía RAC establecido en el art. 18 del Cód. Proc. Constitucional, ante declaratoria de demanda infundada o improcedente en primera y segunda instancia ante el Poder Judicial, ratificándose así el mandado de que el control constitucional se efectúa a todo proceso, cuando se vulneran los derechos constitucionales; por ello nuestro Supremo Tribunal examinó cada caso; sin embargo, el tiempo del llamado amparo electoral fue demasiado extenso en relación al cronograma electoral o a los plazos de los procesos de vacancias, entre otros, los cuales tienen plazos reducidos.

### **Función Jurisdiccional del Poder Judicial**

Nuestro supremo Tribunal en el Exp. N° 006-2006-CC/TC, señala que pese a que los jueces no sean elegidos integralmente por sufragio directo, salvo los jueces de paz no letrado, su elección no deja de tener un sustento popular; y su impartición de justicia debe respetar integralmente el contenido esencialmente protegido de los derechos, los principios y valores; y el respeto a las competencias y atribuciones de otros poderes del Estado.

Siendo así, a través de la función jurisdiccional se tiene la garantía de defensa y protección de todas las personas, ante un posible abuso del poder por parte del Estado, a través de cualquiera de sus entidades públicas.

Según Castillo (2008) gran parte del análisis jurídico contuvo la teoría de la no mutabilidad de la cosa juzgada, y la creación de la cosa juzgada constitucional, que generaba una nueva categoría más alta que la anterior; la cual sólo es emanada en un integro proceso a nivel judicial, con pleno respeto a los Derechos constitucionales

De igual modo, se permite la figura de amparo contra amparo, cuando el proceso anterior no respetó el debido proceso, o sus funcionarios actuaron de manera irregular, cometiendo excesos o omitiendo actuaciones, la cual en principio estaba prohibida, pero mediante la interpretación constitucional se validó dicha posibilidad, frente a sentencias de amparo o cumplimiento que hayan sido emitidas vulnerando el debido proceso y la efectiva tutela procesal.

Tradicionalmente no era factible la evaluación vía judicial de las resoluciones del JNE; sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, en el Caso Susana Higushi vs. Estado peruano – en la cual se denuncia al Perú y al Pleno del JNE por limitar su registro como candidata presidencial por la Agrupación Independiente —Armonía Frempol; la CIDH arribó a un acuerdo amistoso; sustentando en su informe que todas las administraciones electorales que sean adoptadas por los estados deben garantizar el respeto pleno de los derechos de las personas, lo cual incluye su derecho de participación política, y si esto ocurriese, el Estado deberá prever un recurso efectivo ante los jueces o tribunales. Siendo así, nuestro supremo Tribunal, en base a su reiterada jurisprudencia admitió y se avocó al conocimiento de recursos de amparo electoral.

El TC ha establecido jurisprudencialmente que no hay ninguna situación que este fuera del control constitucional ante la posible vulneración de derechos; en virtud de lo cual se ha pronunciado ante el JNE, en los siguientes casos: cuando las autoridades ediles fueron elegidas: Proceso de Amparo N° 5854-2005; 5396-2005; 2730-2006; y, durante el proceso electoral: Proceso de Amparo N° 2366-2003; y, 05448-2011-PA/TC.

Asimismo, el Colegio de Abogados del Callao interpuso acción de inconstitucionalidad de la Ley 26842, la cual establecía la no factibilidad de revisión de las resoluciones electorales ante el Poder Judicial; siendo que por STC N° 00007-2007-PI/TC de 19-06-2007, el TC resolvió declarando fundada la demanda, declarando inconstitucional la citada ley y estableciendo que pese a la interposición de demanda de amparo esto no inhibirá la continuidad del calendario electoral. Razón expuesta en su Stcia. 5854-2005-AA/TC, que los plazos para estas demandas deben ser reducidos y propone un tratamiento más corto, a fin de que sean presentadas ante la Sala Constitucional, ello en la búsqueda de un conocimiento más especializado y un proceso más célere; aunado a ello debemos precisar que el JNE emite resoluciones administrativas y jurisdiccionales.

Salcedo (2006) señala que: *“Dentro del proceso electoral ocurren una serie de actos administrativos, todos los cuales tienen por objeto permitir que los ciudadanos ejerzan el derecho de sufragio y que los votos de estos permitan la elección de las autoridades o determinen el resultado sobre una decisión sometida a consulta ciudadana, traduciendo la voluntad ciudadana de manera exacta y oportuna. Entre estos actos destacan la elaboración del padrón electoral, la determinación de las circunscripciones administrativas, la conformación de las mesas de sufragio, la inscripción de las fórmulas o listas de candidatos, el diseño del material electoral”*.

#### **4. Tribunal Constitucional**

El Tribunal Constitucional actual instaurado con la Carta Magna de 1993, cuyo antecedente es el Tribunal de Garantías constitucionales de 1979. es el ente encargado de la interpretación al más alto nivel, la interpretación constitucional; aunado a ello ejerce el control concentrado de la constitucionalidad siendo el único facultado para expulsar una norma jurídica que ha sido emitida transgrediendo preceptos constitucionales. Es autónomo e independiente, encontrándole sometido únicamente a nuestra carta fundamental y a su Ley Orgánica - Ley N° 28301, por lo cual se afirma que goza de autonomía procesal.

El TC, está integrado por siete magistrados elegidos por el parlamento por un lapso de cinco años. No es factible la reelección continua.

De conformidad con lo pregonado por el art. 202° de nuestra Carta Constitucional, es competencia del TC, resolver en instancia exclusiva el proceso de inconstitucionalidad; y, resolver en instancia final y determinante las resoluciones desestimativas de los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; asimismo, y tramitar los conflictos competenciales o de atribuciones de cada uno de los poderes del estado o entidades públicas en virtud a las atribuciones asignadas por la ley, avaladas en la Constitución.

En la presente investigación, es materia de análisis el proceso de Amparo electoral, es decir el que se interpone frente a resoluciones emitidas por el JNE; bajo el supuesto de vulneración de algún derecho fundamental, por lo cual el Tribunal Constitucional sería el Organismo competente.

Ferrer M. (2004), conceptualiza al TC como el ente jurisdiccional de jerarquía suprema cuya función primordial y privilegiada es la interpretación determinante de las disposiciones constitucionales, sin ser parte del poder judicial, siendo este organismo autónomo, a fin de dotarlo de autonomía en sus actuaciones e independencia en sus decisiones al respecto, estando a que no forma parte del mismo.

A partir de las funciones atribuidas constitucionalmente es que se explica la naturaleza jurisdiccional del TC, al ser el aval de la vigencia y eficacia de los derechos constitucionales, cuya finalidad radica en la administración de justicia, y al ser reconocido como instancia final de los procesos constitucionales, y los conflictos de competencia; siendo que nuestro Tribunal tiene autonomía procesal, la cual le permitirá no permitir ninguna zona exceptuada del control constitucional que este ejerce.

Para el constitucionalista Prieto S. (2003):

*“el Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional además de asumir un control de constitucionalidad, también asume el respeto de los derechos fundamentales, precisando su contenido y estableciendo sus límites. Sin embargo, ello no significa que la justicia constitucional pueda considerarse como justicia análoga y paralela a la justicia ordinaria, sino que simplemente se considera como una vía a la defensa de los derechos fundamentales, conociendo toda calificación jurídica realizada por los tribunales ordinarios que viole o desconozca derechos; pero, sin capacidad de conocer los procesos comunes que resuelvan derechos intersubjetivos ajenos a los derechos fundamentales y que se pronuncien sobre cuestiones de mera legalidad” (p.45- 108).*

## 5. Tipos de control constitucional

El artículo 138 de nuestra Carta Magna, establece el control de la constitucionalidad concentrado, atribuido al TC, interprete supremo de la Constitución; y como el control difuso, ejercitado por los magistrados del Poder Judicial el cual se puede establecer la no aplicación de un precepto legal o de jerarquía menor, que transgreda los preceptos constitucionales, en el caso particular conocido por su judicatura. Se entiende por control constitucional, *“al conjunto de medidas y procedimientos que están destinados a hacer posible se respete y mantenga un estado de constitucionalidad, como base para el ordenamiento jurídico”*.

### - Control Difuso

Este sistema es aquél mediante el cual los tribunales pueden *“declarar la inaplicabilidad de un precepto legal o de inferior jerarquía, que sea contrario a la Constitución, en el caso particular del cual conoce. Cuando la misma sentencia sólo deja sin aplicación el precepto legal en el caso de que se trata, se habla de control concreto de constitucionalidad, que tiene efecto particular o inter partes, quedando vigente la ley inaplicada”*.

El control difuso también llamado "americano", o "Judicial Review", o "Revisión Judicial de la constitucionalidad de las leyes", nació en EEUU, desde 1803 la Suprema Corte Federal sentencia una Acción de Cumplimiento (Writ Of Mandamus) en el tema Marbury vs. Madison, y en donde se manifiesta, que la Constitución de los EEUU, no lo advertía expresamente, pese a ello “los jueces del Poder Judicial pueden declarar, en un caso o controversia concreta sometida a su juzgamiento, si una Ley del Congreso de necesaria aplicación en dicho caso, es o no constitucional; de manera que al determinar que no lo es efectúa una derogación de la ley para el caso concreto materia de su juzgamiento; esto es, determina su inaplicabilidad por colisión constitucional. Esto significa que tal facultad nace sólo dentro del Poder Judicial”.



La Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe en el artículo 14, que:

*“Supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución.  
De conformidad con el Artículo 236° de la Constitución, cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.  
Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aún cuando contra éstas no quepa recurso de casación.  
En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular.”*

Este tipo de Control se encuentra recogido en nuestra Carta constitucional, al señalar:

- *“Artículo 51°.- Jerarquía y Publicidad de las Normas: La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”.*
- *“Artículo 138°.- Función jurisdiccional: La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”.*

Respecto al control difuso, el TC ha precisado en el Exp. N° 1109-2002-AA/TC:

*“El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple, y para que él sea válido se requiere de la verificación, en cada caso, de los siguientes presupuestos:*

- a) Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional (artículo 3° de la Ley N.° 23506).*
- b) Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e insoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia.*
- c) Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución...”*

### **- Control Concentrado**

Los preceptos constitucionales, base del orden jurídico, debe ser defendida, por ello es necesario que se articulen mecanismos de control para su defensa, la que se logra a través de instituciones o mecanismos. En este caso, hablamos de un control concentrado si un solo órgano lleva a cabo la tarea de considerar si la norma de menor rango contraviene o no los postulados de la Constitución; este sistema es ejercido por TC, siguiendo el sistema Europeo, siendo un ejercicio ad hoc, directo y derogatorio erga omnes.

### **- Control dual o mixto**

Es el modelo americano, en el cual un único órgano, la Corte Suprema, es instancia exclusiva y definitiva, pues conoce el control incidental, siguiendo el modelo americano y también el control abstracto que se refleja en la expulsión de las normas que transgreden el ordenamiento jurídico; siendo un mix de ambos sistemas, lo cual permite una mayor cobertura con variantes que permiten abarcar todas las situaciones y lo torna en completo o integral; y también se le considera Modelo dual o paralelo; pues coexisten en un sistema jurídico nacional, sin fusionarse o extinguirse; así, por ejemplo, Perú desde 1979 y Chile desde 1980.

## **Capítulo III**

### **Análisis de datos**

#### **1. Tipo de Investigación.**

La investigación es teórica a nivel descriptivo.

Se describirá tres de las instituciones que integran el ordenamiento jurídico: Jurado Nacional de Elecciones, como organismo autónomo; Tribunal Constitucional como ente autónomo que vela por la Supremacía de la Constitución y Poder Judicial como Poder del Estado; nuestro propósito es describir la situación actual, por lo cual necesitamos considerable conocimiento del Bloque de la Constitucionalidad. Se explicarán cada una de las atribuciones que tiene el JNE, PJ y TC, así como la procedencia del amparo contra resoluciones jurisdiccionales emitidas por el JNE, finalmente arribaremos a la presentación de un modelo teórico que determine la exclusiva y efectiva facultad de revisión a resoluciones jurisdiccionales del JNE.

#### **2. Métodos de investigación.**

En la presente, según lo enfatizado por Hernández (2019), “se establecerá una relación metodológica ubicada en el método cualitativo”. Es así que analizaremos las sentencias de amparo que han sido declaradas fundadas, así como el precedente vinculante que precisa la competencia del Tc, no existiendo zonas exentas de su control

#### **3. Diseño de contrastación.**

El propósito de este estudio cualitativo – teoría fundamentada es determinar si el Proceso de amparo contra resoluciones jurisdiccionales emitidas por el JNE debe ser conocido por el PJ, o tramitarse de manera exclusiva ante el TC, para lo cual se analizarán resoluciones de procesos de amparo que han arribado hacia el TC, así mismo el precedente vinculante que expone la no existencia de áreas exceptuadas de control constitucional, como la acción de inconstitucionalidad que declara inconstitucional el inc. 8 del art. 5 del CPC, que pretendía restringir el control constitucional a las resoluciones electorales.

El diseño es teoría fundamentada, mediante la cual sostendremos que el único organismo adecuado para tramitar los procesos de amparo electorales es el Tribunal

Constitucional. Según Hernández y Mendoza (2019), citando a Taylor y Francis, “*en la teoría fundamentada el investigador produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes*”. (p.526)

Asimismo, utilizaremos como métodos de análisis el interpretativo constitucional, argumentativo, inductivo y deductivo.

La presente estudia el Poder Judicial, quien realiza el control difuso de la Constitución, y capaz de corregir una resolución jurisdiccional emitida por el JNE, pese a que ambos se encuentran en el mismo nivel jerárquico (Poder del Estado y Organismo Constitucionalmente Autónomo, respectivamente), correspondiendo, de ser el caso, la aplicación del Control Concentrado de la Constitución, el cual sólo realiza el Tribunal Constitucional; en virtud de lo cual se justifica que la presente investigación debe analizar las facultades exclusivas de “control constitucional”.

Esta investigación se realiza con la finalidad de establecer cuáles son las facultades del PJ y del JNE, como Organismos Constitucionalmente Autónomos del Estado peruano.

#### **4. Población y Muestra.**

Población: “Todas las Resoluciones Jurisdiccionales del JNE que han sido cuestionadas mediante Amparo electoral y han sido conocidas por el TC a la fecha, las cuales son: STC N.º 02466-2019, 07247-2013, 2366-2003, 2730-2006, 5448-2011, 0033-1995; 0971-1998; 1420-2002-AA/TC; 1804-2002-AA/TC; 2119-2002-AA/TC; 2346-2002-AA/TC; 2366-2003; 0252-2004; 0571-2004; 2668-2004; 3981-2004; 4543-2004; 1365-2005; 4773-2005; 5396-2005; 5854-2005; 7632-2005; 2730-2006; 2746-2006; 3285-2006; 3317-2006; 6649-2006; 6901-2006 y el proceso de inconstitucionalidad 0007-2007.

En la presente la muestra está constituida por: Resoluciones Jurisdiccionales del JNE que han sido cuestionadas mediante Proceso de Amparo en Materia electoral, las mismas que están contenidas en los Expedientes N.º 02466-2019; 07247-2013; 2366-2003; 2730-2006; 5448-2011 y la acción de inconstitucionalidad 0007-2007, que ascienden al 20% de las mismas.

## **5. Técnicas de recolección de datos.**

La técnica de procesamiento en la presente investigación “se llevará a cabo a través del procesador Word y Excel, para el procesamiento de la literatura y de los datos estadísticos respectivamente. Se analizará el derecho positivo a fin de determinar si es correcto o en su realización hay defecto o deficiencia, para llegar a corroborar la hipótesis”.

Nuestros materiales documentales a usar serán: Normas, Jurisprudencias, Doctrina, Libros jurídicos, Leyes, Decretos Legislativos.

## **6. Procesamiento y análisis e interpretación de datos.**

Se han recolectado los datos mediante el fichaje, para el material extraído de libros, revistas y portales institucionales; y guías de observación a fin del análisis de las sentencias recaídas en amparo electoral, precedente vinculante y acción de inconstitucionalidad

Los datos han sido revisados, categorizados y organizados en función a la decisión de las sentencias (fundadas, infundadas, improcedentes), finalmente se eligió por conveniencia sentencias emitidas en procesos de amparo, EXP. N.º 02466-2019, 07247-2013, 05448-2011, 5854-2005, 2366-2003, y la Acción de Inconstitucionalidad tramitada en el Exp. N°00007-2007.

Luego, los datos se han transcrito en bitácoras y anotaciones, definiendo a cada una de las sentencias de los procesos de amparo como una unidad de análisis, determinando que ascienden a 6, las cuales coinciden con el porcentaje determinado como muestra.

Se efectuó una codificación axial y abierta, comparando una sentencia con otra a fin de determinar los puntos de convergencia y divergencia; así mismo se codificó la información extraída de la normativa y doctrina, a fin de extraer la teoría a postular, la cual validó la hipótesis propuesta, siendo que la investigación cumple con criterios de dependencia la cual incide en la consistencia de ellos resultados, así mismo tiene una máxima validez, pues al recolectar la información se consignó al autor de la misma y se precisó en cada caso cual es la opinión del investigador.

Siendo que los procesos de amparo que versan en materia), es que será sencillo para cualquier investigador transferir la aplicabilidad de los resultados, los cuales podrán ser confirmados y finalmente avalar el modelo teórico propuesto.

## 7. Resultados.

### **Análisis de la irrevisabilidad de las Resoluciones del JNE en sede Judicial.**

El Poder Judicial, encargado de impartir justicia, esa es la autoridad delegada por el pueblo, la cual debe ejercerse en convención con la Constitución y sus principios. Pese a su independencia e imparcialidad, esta institución ha tenido a lo largo de la historia una serie de cuestionamientos en función a su eficiencia y eficacia, razón por la cual, desde 1979, las Constituciones Peruanas incorporan un Tribunal de Garantías Constitucionales, ahora llamado Tribunal Constitucional; a fin de efectuar parches a una justicia deficiente.

En la Constitución de 1993, se precisa que el Poder Judicial debe preferir en su aplicación a las normas constitucionales, bajo unidad y exclusividad constitucional; sin embargo, la misma Constitución “otorga la competencia de administrar justicia al JNE, en materia electoral”; siendo así, se separó de la justicia ordinaria a la justicia electoral.

Así las cosas, la propia Constitución no determina de modo alguno la superioridad o superposición de la Competencia del Poder Judicial sobre el JNE, que, al ser un Organismo constitucionalmente autónomo, se gobierna por nuestra Carta suprema y su Ley Orgánica.

Según el art. 142° de nuestra Constitución: *“No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral (...)”*.

En sentido amplio, este artículo pregonar que ninguna resolución emanada por el JNE pueda cuestionarse ante el Poder Judicial, sea administrativa o jurisdiccional, esto en virtud a que el JNE es instancia final electoral, no siendo revisables por el Poder Judicial.

Dentro de las funciones jurisdiccionales del JNE, encontramos a las Resoluciones que inscriben candidatos/as a la Presidencia, Vicepresidencias y Parlamento Andino; las que resuelven apelaciones y tachas a las solicitudes de registro de listas de candidatos a elección popular a nivel congresal, regional y local; las que resuelven apelaciones sobre actas electorales observadas y actas impugnadas; las resoluciones que declaran nulo total o parcialmente los comicios electorales, entre otros; la proclamación de resultados y acreditación a los ciudadanos seleccionados; las resoluciones que resuelven apelaciones

contra las resoluciones de la ONPE, el RENIEC, la DNROP, los JEE; y las resoluciones en instancia final en la vacancia y suspensión de autoridades a nivel local y regional; convocatoria a referéndum y consultas populares. En primera instancia administran justicia en materia electoral.

En relación a sus funciones administrativas, el JNE emite resoluciones que delimitan las demarcaciones y sedes de los JEE, registrando espectadores y encuestadoras; elabora y sustenta el presupuesto del Sistema Electoral; selecciona por sorteo al tercer miembro de los JEE y concede exención ante la inasistencia al sufragio; y mediante resolución certifica el padrón electoral.

Sin embargo, como hemos advertido del análisis de los Exps. N.º 02466-2019, 07247-2013, 05448-2011, 2730-2006, 2366-2003 (amparos declarados fundados) Exp. N.º 5854-2005 (amparo declarado infundado), y Exp. N.º 00025-2014, 01920-2013, y 01747-2014 (amparos declarados improcedentes) -detallados en el acápite subsiguiente-, todas estas han sido tramitadas en primera y segunda instancia ante el Poder Judicial, el cual no ha amparado las mismas, razón por la cual vía agravio constitucional llegaron al Tribunal Constitucional.

Al respecto conviene precisar, que de los procesos de amparo analizados, hemos podido advertir que varios de ellos han sido declarados improcedentes por sustracción de la materia, estando justamente a la demora que tuvo el mismo en las instancias judiciales, las cuales pese a tener la prohibición expresa amparadas en que no preexisten áreas exceptuadas de control constitucional han conocido las mismas, sin embargo en primera, ni en segunda instancia sus pretensiones han sido amparadas, lo cual denota que el Poder Judicial ha preferido no atender los pedidos de los demandantes, quizás para no transgredir el art. 142º de la Constitución, con la finalidad de que llegue al supremo interprete constitucional, nuestro TC.

Conviene precisar que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, obediente a los preceptos constitucionales y la ley, así también, el JNE es un ente constitucionalmente autónomo; ambos encargados de impartir justicia, de manera general y electoral; respectivamente. Ninguno se encuentra sobre el otro, razón por la cual sus



resoluciones no pueden ser revisadas entre sí; a diferencia de la potestad suprema que tiene nuestro Tribunal Constitucional, sumo interprete de la Constitución.

### **Análisis de la Supremacía del Tribunal Constitucional frente a cualquier controversia en la que se discuta vulneración de Derechos fundamentales.**

Existe jerarquía de la Constitución ante cualquier otra norma, estando los jueces obligados a salvaguardar y a aplicar nuestra Carta Magna, siendo el Tribunal Constitucional el facultado a interpretarlas.

El Poder Constituyente, al emitir la Constitución, ha determinado que el garante de la constitucionalidad, por excelencia, es el TC (artículo 201° de la Constitución).

Siendo así, mediante procesos constitucionales, dentro de los cuales ubicamos al amparo, se avala jurisdiccionalmente la potencia normativa de la Constitución, y el TC como instancia final y determinante en las acciones constitucionales de la libertad y única instancia en procesos normativos, afianzándose que si bien el TC no es el único órgano para interpretar la Constitución si es el supremo, conforme lo prescribe la Ley N.º 28301- y el art. 1 ° del Reglamento Normativo del TC.

El CPConst., determina que “Artículo VI del Título Preliminar, los magistrados no pueden dejar de aplicar una norma que, habiendo sido cuestionada con una acción de inconstitucionalidad, fue confirmada”; así también que las normas constitucionales priman sobre las demás normas; siendo que todo debe interpretarse en torno a la Constitución y los principios Constitucionales, los cuales son desarrollados por el TC en sus sentencias.

Cabe resaltar que el hecho de que todas las interpretaciones emitidas por el TC deban ser acogidas por los magistrados, no transgrede la independencia y autonomía de los magistrados del PJ, prescritas en inciso 2 del art. 139° de nuestra carta suprema, pues su función es generar predictibilidad en la administración de justicia, en la constante búsqueda de certificar la eficacia de los derechos; justamente con el fin de limitar que los otros órganos constitucionales -como lo es el JNE, se hallen exceptuados de control jurisdiccional, lo cual conlleva a la desvinculación de las resoluciones emitidas.

Según Landa (2006), la naturaleza del TC es compleja, pues es factible considerarla como un órgano constitucional. Jurisdiccional y/o político.

Como órgano constitucional, nuestro TC es autónomo en su composición, estructura, formas de elección de sus integrantes, recibiendo una especial preponderancia para su autonomía procesal, siendo complementarias las apreciaciones del legislador, a las establecidas en su propia Ley Orgánica. Es pues el TC el vértice de la organización estatal pues no está inmerso en el sistema de división tripartita de poderes, siendo el encargado de controlar la carta suprema, la cual debe ser aplicada por todos los poderes públicos, y los organismos constitucionalmente autónomos con el JNE, a quien nuestra constitución le encomendó prerrogativas tales como la impartición de justicia electoral.

Pese a que el Tribunal Constitucional no está comprendido como un órgano del Poder Judicial (pues se encuentra fuera de este), el TC desarrolla función jurisdiccional, acción y proceso. Es pues el TC por excelencia el encargado de administrar justicia en materia constitucional, no sólo es un legislador negativo (como antes se consideraba), sino que precisa e interpreta el contenido esencial y su doble dimensión, abarcando los ámbitos subjetivo y objetivo.

Así mismo, es político, al ser un portavoz del poder constituyente, siendo capaz de pronunciarse en cuestiones políticas, como la vacancia presidencial recientemente conocida por este órgano contralor; más aún en estados como el nuestro en el cual siempre nos encontramos frente a crisis políticas y la separación de poderes y su adecuado ejercicio se ha visto deslegitimado por la ciudadanía.

De la misma manera, el TC, es el encargado de moderar los conflictos de competencias entre los poderes del estado, característica que denota su superioridad avalada constitucionalmente.

Según Landa (2006) *“el Poder Judicial, así como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, están subordinados a sus decisiones y, por ende, estos poderes del Estado deben acatar los fallos del Tribunal Constitucional”*. (p. 253)

El TC adquiere el respecto a sus decisiones a través de la legitimidad de sus resoluciones, las cuales se ciñen al criterio de proporcionalidad en sus “juicios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”, así como su predictibilidad, su autocontrol, y autorregulación; por esta razón las decisiones del TC, no pueden ser cuestionadas en sede judicial, siendo que ante ellas sólo puede accederse a la justicia supranacional, de acuerdo al art. 205 de nuestra Carta Suprema y 114 del Código Procesal Constitucional.

En principio, los procesos constitucionales de la libertad, como es el caso del amparo (general), es conocido por el Poder Judicial; sin embargo, los amparos contra resoluciones judiciales, van contra resoluciones del mismo Poder judicial o contra cualquier persona natural y/o jurídica, siendo que estas se hayan inmersas en la justicia ordinaria, no obstante ello, en la presente investigación demostraremos la especial naturaleza del amparo electoral.

Partimos de la premisa, que al apartarse del control abstracto o concreto del TC, el control efectuado por el PJ no es válido, evidenciándose la confluencia de la jurisdicción ordinaria y constitucional en los procesos de amparo, pero los amparos electorales tienen criterios de especialidad en su emisión, razón por la cual el Poder Judicial no debe conocerlos, diferencia es por decir, el caso del pronunciamiento en razón a penas en procesos penales, cuya especial pronunciamiento corresponde al Poder Judicial.

Es así que “existe jerarquía del Tribunal Constitucional sobre el Poder Judicial y sobre cualquier otro órgano o poder del Estado”, precisando que el TC puede emitir sentencias estimativas (de anulación, interpretativa o interpretativa manipulativa); desestimativas (de simple rechazo o por interpretación *strictu sensu*), siendo que su eficacia es primordial para la tutela judicial de las personas.

Son erga omnes, los efectos de las sentencias del TC, siendo su efecto ex nunc (a futuro). Las sentencias del TC ostentan un carácter fuerte que no puede ser variado por sentencia judicial o ley, ni presentada una acción de inconstitucionalidad frente a la misma; y al declarar alguna norma inconstitucional deja sin efecto la misma y las normas conexas diferentes al fallo.

La potencia de las decisiones del TC, determina que el Poder Judicial no puede revocar la sentencia, no aplicar la norma declarada inconstitucional, ni inaplicar una norma que haya sido confirmada por el TC (a través de la desestimación de su inconstitucionalidad), constituyendo cosa juzgada, razones con las cuales sustentamos la supremacía de nuestro TC y su jurisprudencia, siendo que el Poder Judicial esta sometido a las decisiones de constitucionalidad emitidas por el TC, del mismo modo el congreso y todos los poderes públicos.

Conviene recordar que las decisiones del TC, son interpartes, pero su ratio decidendi es la que vincula a todos los tribunales ordinarios; pues sólo pueden apartarse de un precedente, cuando el caso sea distinto, pues la independencia judicial no determina que pueden interpretar la constitución de modo distinto pues caeríamos en incongruencia interna del ordenamiento constitucional; trasgrediendo el mandato de ejercer funciones con las limitaciones que la Constitución establece.

Es importante comentar que en la pirámide Kelseniana encontramos a la Constitución y su interpretación como cúspide de la misma, y a las normas emitidas por el Congreso en un segundo nivel, lo cual también denota la supremacía del TC sobre los poderes públicos y políticos.

## **Análisis de la Sentencias emitidas por el TC respecto a amparos contra resoluciones jurisdiccionales emitidas en materia electoral que declaran fundada la demanda de amparo**

### **- EXP. N.º 02466-2019-PA/TC**

La última sentencia que se pronuncia en materia electoral, es la emitida ante el RAC en presentado por Guido Iñigo Peralta frente a la resolución de 24 de abril de 2019, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte de Lima Sur, que determinó infundada la demanda, correspondiente al Exp. N.º 02466-2019-PA/TC, cuya fecha de emisión es 3 de setiembre de 2019.

La acción de amparo fue interpuesta el 12 de setiembre de 2018, contra los integrantes del Jurado Electoral de Lima Sur 2, el Pleno del JNE y su procurador público, requiriendo que se dejen sin efecto las Resoluciones 2382-2018-JNE, 2419-2018-JNE, 2418-2018-JNE y 2461-2018-JNE, las cuales confirmaron las resoluciones que declararon fundadas las tachas interpuestas contra el candidato a alcalde Guido Iñigo Peralta, y lo retiraron del proceso de elecciones regionales y municipales de 2018, señalando como petitorio que se ordene la entrega de credenciales como alcalde de la MD VillaMaría del Triunfo por el partido político Perú Patria Segura.

El candidato señalaba que fue tachado pese a acreditar su domicilio múltiple y desarrollar actividades habituales de índole político y laboral en el distrito al cual postuló como alcalde, alegando vulneración a sus derechos al sufragio pasivo, a la debida motivación, la defensa, entre otros.

En primera instancia, se resolvió declarando improcedente la demanda, pues no advirtió una exclusión arbitraria de la candidatura. En segunda instancia la Sala Civil, con fecha 23 de noviembre de 2018, estimó que la resolución apelada fue emitida con una motivación aparente, declarando nulo el auto recurrido y ordenando nueva calificación de la demanda.

Al retornar al Juzgado Especializado Civil, este resolvió declarando infundada la demanda pues consideró que: no existió exclusión arbitraria de la candidatura, pues existe una comprobación del fiscalizador electoral mediante la cual se verificó que el demandante

no tiene domicilio real en el distrito de Villa María del Triunfo. Asimismo, tampoco acreditó haber laborado en el mencionado distrito más de dos años; por lo tanto, no ha probado tener domicilio múltiple; en segunda instancia la sentencia fue confirmada por símiles fundamentos.

Dentro de la sentencia sub examine, se considera la relevancia del control constitucional, con especial énfasis en la no literalidad de los art. 142 y 181 de nuestra Carta Constitucional, por el contrario, utilizando la interpretación sistémica de la misma, citando lo establecido la sentencia del Exp. 05854-2005-PA/TC – caso Lizana Puelles, que determinó como precedente:

*“Fundamento 35.- En tal sentido, sin perjuicio de lo que luego se sostendrá, llegado a este punto, el Tribunal Constitucional se encuentra en condiciones de afirmar que toda interpretación de los artículos 142° y 181° de la Constitución que realice un poder público, en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales, se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, es una interpretación inconstitucional. Consecuentemente, toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales, la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente.*

*En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst., este criterio normativo constituye precedente vinculante para todos los poderes públicos.*

*Todo juez y tribunal de la República -sea que realice funciones estrictamente jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales-, se encuentra vinculado por este criterio, bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y Primera Disposición Final de la LOTC)”.*

Estando a ello el TC interpretó la documentación, evidenciándose que se acreditó que contaba con un mínimo de actividad en el domicilio de Villa María del Triunfo, razón por la cual primigeniamente se inscribió como candidato, conforme consta en la Resolución 00227-2018- JEE-LIS2/JNE, de 25-07-2018.

Siendo así, evidenciándose, en el domicilio aludido si se verificó ocupación habitual, se ha vulnerado el derecho de participación política del demandante.

Así mismo el tribunal analiza la motivación suficiente y adecuada de las resoluciones del JNE, evidenciando la exclusión del demandante fue por incorporación de información falsa en el formato elaborado por el JNE para la declaración jurada de la hoja de vida, sin

embargo, se le excluyó por otro motivo, evidenciándose la infracción al principio de congruencia, vulnerándose la motivación que debe sustentar toda resolución.

Respecto al estado situacional de los hechos, el TC, precisó que Eloy Chávez Hernández, ya contaba con la credencial que lo acredita como alcalde- del Concejo Distrital de Villa María del Triunfo-, periodo 2019-2022, por lo cual se ha verificado la sustracción de la materia; situación que no obsta de modo alguno la diligencia del segundo párrafo del art. 1 del CPC, es decir disponer al demandado no cometer las mismas acciones u omisiones, bajo apercibimiento del establecimiento de medidas coercitivas, siendo que decide estimar la demanda.

Como hemos podido advertir, la primera y segunda instancia del amparo se desarrolló ante el P.J., institución que determinó la inexistencia de exclusión arbitraria de la candidatura, ante la comprobación del fiscalizador electoral mediante la cual se verificó que el demandante no tiene domicilio real en Villa María del Triunfo y la no acreditación de laboró más de dos años, sin hacer un análisis adecuado al derecho de participación política, derecho fundamental, ni siquiera se detuvo a analizar la motivación de las resoluciones cuestionadas.

Es así que se evidencia que el control constitucional a las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, debe efectuarse por nuestro supremo interprete constitucional, quien, con un criterio más amplio, evita y limita la transgresión a nuestros derechos fundamentales.

**- EXP. N.º 07247 2013-PA/TC**

Santiago Mozo Quispe, presenta demanda de amparo frente al JNE con el objeto que se declaren nulas las Resoluciones N.º 0818-A-2011-JNE y 049-2012-JNE, a través de las cuales se le vacó del cargo de Alcalde de la MD Villa El Salvador, y que se le restituya en el cargo, incluyendo el pago de costas y costos procesales.

El citado recurrente fue condenado a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el término de 2 años bajo las reglas de conducta y a 6 meses de inhabilitación por delito de defraudación tributaria; las cuales fueron cumplidas al 25 de agosto de 2010, por

lo que operó la rehabilitación de forma automática, de conformidad con el artículo 1° del Código Penal y también se eliminaron sus antecedentes penales, lo que fue validado en la Resolución de 6 de diciembre de 2010, en el expediente N.° 244-07 (Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de Lima), la cual a su vez fue confirmada por la Sala Penal Nacional ratificándose así la fecha de su rehabilitación. Precisa que en la fecha en que se desarrollaron los comicios municipales, el 3 de octubre de 2010 y para su proclamación al ser elegido, su situación jurídica era rehabilitado, por lo cual las resoluciones emitidas por el JNE resultan arbitrarias y lesivas a su derecho al debido proceso y a su participación política entre otros.

El Procurador del JNE precisa que el ahora demandante no había cumplido con el pago, por lo cual cuando fue elegido estaba suspendido de su capacidad de ejercicio ciudadano.

En primera instancia se resuelve declarar infundada la petición, argumentando que las decisiones no son arbitrarias, ni carentes de razonabilidad, en igual modo se pronunció la Sala revisora; ante la denegatoria en doble instancia, el demandante presenta el RAC.

El TC, sustenta la procedibilidad del amparo en sus fundamentos expresados en sentencias anteriores.

Así también precisa que la vacancia del alcalde, se dio en función al numeral 6 del art. 22° de la LOM:

*“El cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo municipal, en los siguientes casos: (...)*

*6. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad (...).”*

De análisis a la Resolución N.° 0818-A-2011-JNE, se evidencia que el discernimiento utilizado a primera instancia fue que el ahora demandante se rehabilitó el 27 de julio de 2011, fecha con frase de ante en ejercía el cargo de alcalde; otros magistrados integrantes consideraban que la rehabilitación operó recién con la emisión de la resolución de fecha 6 de diciembre de 20210, cuando ya era un alcalde electo.

A fin de confirmar la resolución de primera instancia electoral, el JNE a través de la Resolución N.° 049-2012-JNE, se señaló que no existió interpretación restrictiva a los



alcances de la sentencia, estando a que la propia sentencia no precisa expresamente desde qué momento debe considerarse rehabilitado al ahora demandante y la sala en apelación es la que determina la fecha en que se produce la rehabilitación, sin que esto logre ser desconocido por el JNE.

Nuestro Tribunal supremo reflexiona que es necesario establecer la fecha en que el demandante se rehabilitó, para lo cual cita el art. 69° del Código Penal, el cual señala: “ *la rehabilitación se efectúa cuando ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta*”, siendo esta declarada por juez penal (facultad exclusiva y excluyente); en ese sentido el TC, advierte que la Sala Penal declaró la rehabilitación surtió efectos a desde el 25 de agosto de 2010 (aunque el JNE hay determinado fechas diferentes).

Es así que el pedido de vacancia no debió estimarse, pues la condición no se había cumplido, siendo así el TC, declara: fundada la demanda y la nulidad de las Resoluciones impugnadas.

**- EXP. N.º 05448-2011-PA/TC**

Mediante demanda de amparo contra el JNE, presentada el 11-02-2011, modificada el 18-02-2011, Percy Rogelio Zevallos Fretel, requirió se declare nula la Resolución N.º 4636-2010-JNE, de 16 de noviembre de 2010, que determinó infundado el recurso extraordinario presentado por la organización política Somos Perú, confirmó la Resolución N.º 2542-2010-JNE, del 13 de octubre de 2010, la cual determinó excluirlo como candidato a Consejero Regional Titular de la citada organización política, en el proceso electoral del 2010 al GORE Huánuco; solicitando se retrotraiga al estado anterior de la violación, es decir se le reponga como Consejero Regional de Huánuco, argumentando transgresión al debido proceso, y otros derechos. Asimismo, alegó ser excluido por Solicitud de exclusión no establecida previamente en normas electorales, sin otorgársele oportunidad de defenderse, validándose una tacha extemporánea, lo cual viola el procedimiento previamente determinado por la ley y reglamento electoral vigente a dicha fecha.

El procurador del JNE, precisa: se ha efectuado un adecuado análisis, que contra las resoluciones no procede recurso alguno, en consonancia el art. 181 de la Constitución.

Siendo que primera instancia declaró improcedente la demanda, en virtud al art. 5.5° del Cód. Proc. Constitucional, considerando que no se evidencia vulneración de derechos, que el DNI del actor consideraba un domicilio diferente al de la Región Huánuco, y que ya se había elegido a las autoridades electorales: en igual modo se pronuncia la segunda instancia.

En esta jurisprudencia, el TC enfatiza que con anterioridad ha señalado la procedibilidad de demandas de amparo interpuestas frente a resoluciones del JNE, cuando se advierta vulneración a derechos inherentes a las personas, es decir fundamentales.

Ello atendiendo a que ningún poder público puede por acción u omisión desconocer derechos fundamentales ni encontrarse excluido del control de la constitucionalidad realizado por el TC. Conviene recalcar que el TC además de ser supremo intérprete, vela por su supremacía y el respeto irrestricto de los derechos constitucionales.

Asimismo, el Tribunal Constitucional precisa que el JNE, es instancia última en materia electoral cuándo sus funciones han sido ejercidas en forma de vida es decir compatibilizada con las normas establecidas por la Constitución las cuales protegen los derechos fundamentales contrario sensu ante su quebrantamiento el control constitucional efectuado por el tribunal constitucional es plenamente viable.

Del mismo modo, el TC precisa en el precedente vinculante emitido por la acción de inconstitucionalidad - expediente N.º 5854-2005-PA/TC, señaló como la plena necesidad de someter a las resoluciones electorales a un examen de eficacia constitucional mediante el amparo.

Así también precisa en razón a la acción de inconstitucionalidad N.º 0007-2007-PI/TC, la que declaró inconstitucional el artículo 5º, numeral 8), de la Ley N.º 28237, que señalaba la improcedencia de acciones de amparo contra resoluciones emitidas por el JNE.

En primera instancia el juez determinó la ocurrencia de sustracción de materia controvertida siendo que la afectación se había tornado en irreparable al respecto el precedente vinculante del amparo N.º 5854-2005, 39b, señaló que devendrá en irreparable

la afectación de derechos en las cuales precluye las fases del proceso electoral Sin embargo insta a la determinación de responsabilidades acorde al artículo 1 del CPC siendo que respalda la seguridad jurídica de toda la población, precisando a su vez que ninguna presentación de demanda de amparo contra el JNE suspendería el calendario electoral, previamente establecido.

En este caso bajo análisis la vulneración se efectuó de manera posterior a las elecciones cuando siendo elegido Consejero Regional de Huánuco se excluyó, en virtud de lo cual ahora demanda nulidad de las resoluciones que avalan la exclusión.

El demandante señala que el JNE no esta facultado a limitarle su derecho de participación ciudadana, pues ya era un representante popular siendo que fue separado del cargo en virtud a una solicitud de exclusión con lo cual se excedió en sus facultades, limitando sus derechos de participación en la vida política del Estado, a ser representante o al elegir a los mismos, al procedimiento preestablecido y a la defensa procesal.

A fin de excluir al candidato dos días antes de las elecciones se interpuso la citada exclusión la cual fue fundamentada en el incumplimiento al requisito de residencia siendo que un día antes de las elecciones esto estos de octubre del 2010, se desestimó la solicitud de exclusión presentada. En octubre 2010 se llevaron a cabo las elecciones para elegir alcaldes y gobernadores regionales, así como otras autoridades de dichos niveles, siendo electo el demandante; no obstante ello, al resolver en apelación la citada solicitud el Jurado Nacional de elecciones de excluirlo como candidato a consejero regional titular, ergo era consejero regional titular y no candidato.

El demandante solicita que se desestime la resolución que lo excluye; no obstante ello, el Jurado JNE se pronuncia desestimando su petición, mediante Resolución N.º 4636-2010-JNE, del 16/11/2010.

La sentencia en cuestión señala el procedimiento de etapas con efectos terminantes y plazos de caducidad del proceso electoral, detallado en la base teórica de la presente tesis las cuales concluyen con la acreditación de los candidatos elegidos. Al detenernos en la primera etapa electoral referida a la convocatoria está evidencia el pleno ejercicio del derecho a participar en la vida política, es decir a elegir y ser elegido; la segunda etapa del

proceso detalla las actividades desplegadas a fin de ejercer el derecho al sufragio que tienen como finalidad que la elección se lleve organizada y pacíficamente. Finalmente, la tercera etapa se produce posterior a las elecciones cuya finalidad es conseguir que la contabilización de votos del acto eleccionario sea reflejo puntual de la soberanía popular.

Es de precisar que la normativa emitida por el JNE, en el marco de las elecciones en comentó precisó en su reglamento de listas - inscripción de candidatos que si se presentará alguna causal de exclusión que menoscabe las garantías sustanciales del proceso el JEE o el pleno del JNE en su oportunidad, tienen la facultad de regularizar el proceso, estando facultados a excluir el candidato sin que afectar en modo alguno el cronograma electoral.

De ese modo, en caso se hubiere decidido excluir al candidato, esta exclusión debía darse cuando tenía dicha condición, y no cuando ya era una autoridad electa por elección popular, vulnerándose el derecho a un debido procedimiento formal y material pues no tenía las facultades, y tampoco lo hizo en el tiempo que las normas electorales habían previsto. El TC determina que el JNE, tramitó la solicitud de exclusión en el transcurso del proceso electoral, como si fuere el derecho de petición, el cual no se da sólo en un proceso electoral.

Así mismo, nuestro supremo tribunal cuestiona lo señala en la Resolución N.º4636-2010-JNE, que señala que el demandante, aún no era electo, pues no se había efectuado la proclamación; al respecto determina que existe un vicio en el tiempo en que se produjo la exclusión; siendo que esta resolución no determinaba la exclusión sino el impedimento al candidato electo de ejercer funciones, indistintamente de haberse proclamado o no.

Es de recalcar que el JNE, es el primer llamado a respetar su cronograma electoral; situación que se empeora cuando se aceptan trámites no establecidos por la ley, afectando y alterando el resultado de los comicios electorales.

En virtud a lo expuesto, nuestro supremo Tribunal determinó fundado el amparo, nulas las resoluciones en mérito y estableció que el JNE otorgue la acreditación al

ciudadano elegido popularmente como Consejero Regional de Huánuco, don Zevallos Fretel.

Nuevamente, cuestionamos las sentencias de primera y segunda instancia, las cuales sin hacer un análisis adecuado, pues se limitan a indicar que ya habían culminado las elecciones, sin advertir la vulneración al derecho a participar en la esfera política, que era el meollo del asunto.

**- EXP. N.º 2730-2006-PA/TC**

La presente causa tuvo como origen el trono municipal de la ciudad de Chiclayo, lugar donde se desarrolla la investigación, siendo unos de los casos preliminares y el que instó al autor a desarrollar la presente tesis. Arturo Castillo Chirinos presenta acción de amparo el 21/06/2005 y subsanación de fecha 27/06/2005, ante el JNE, Rodolfo Elías Guerrero Barreto y don Hildebrando Barrueto Sánchez, a fin de que se resuelva como nula la Resolución N.º 156-2005-JNE de fecha 6/06/2005, expresada en la resolución de vacancia N.º J-0007-2005, que lo separó de la alcaldía de Chiclayo, vulnerando debido procedimiento administrativo, motivación de las resoluciones y contraviene la litispendencia pues fue vacado por tener sentencia firme; sin embargo, el JNE tenía conocimiento que se encontraba en trámite un incidente de recusación, por lo cual la causa aún estaba pendiente.

El TC, en relación a la procedencia del amparo electoral, analiza los principios de unidad de los preceptos constitucionales y concordancia práctica de los mismos, que existiría aparente contradicción entre los arts. 2º 1 y 140º, 2º 2 y 103º, 139º 2 y 200º 2, entre otros de la Constitución, lo cual ocurriría por una interpretación aislada, siendo que el principio de unidad implica que nuestra carta magna representa una unidad armónica, y en virtud a la concordancia práctica se debe *“resolver toda aparente tensión entre sus disposiciones optimizando su contenido normativo en conjunto, teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional se encuentra orientado a proteger los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana”*, caso contrario se vulnera la seguridad jurídica y se afectan derechos fundamentales.

En sus fundamentos el JNE precisa que sus decisiones son irrevisables; sin embargo, esto atentaría en contra del artículo 200 inc. 2 de nuestra Carta Constitucional pues es derecho las personas acudir al tribunal competente ante cualquier acción u omisión a sus derechos fundamentales reconocidos tanto en nuestra Carta Magna, como en los tratados o convenios internacionales de los cuales nuestro País es parte.

Los artículos 142 y 181 busca fidelizar la justicia electoral de manera exclusiva al JNE inhibiendo que otros poderes del estado ejecuten dación de justicia respecto a temas de carácter especial. siendo así la controversia no resulta en que sí otro organismo tiene competencia para conocer asuntos electorales, sino que el tribunal constitucional que tiene la competencia para conocer cualquier agravio frente a la violación de derechos primordiales.

Al respecto conviene precisar que, nuestro estado ha confirmado la Convención Americana de Derechos Humanos (12 de julio de 1978). Asimismo, ha reconocido como forzosa y de total derecho la capacidad contenciosa de la CIDH. Al respecto, las normas nacionales deben apreciar y ceñirse a cánones y jurisprudencia a nivel internacional.

El TC considera que la sala revisora debió considerar la procedibilidad de acciones de Amparo frente a resoluciones del JNE que vulneren derechos constitucionales, lo cual concuerda con una interpretación sistemática de nuestra constitución; asimismo, la norma prevé que de existir incompatibilidad entre diferentes normas prima la norma de carácter constitucional y que “los poderes del estado como el legislativo y judicial no tienen jerarquía de uno sobre otro, sino que son poderes de idéntico rango.

Asimismo, el tribunal precisa de la aplicación de la ley 28642 no está activa el caso concreto Por qué no se deben cambiar las reglas procedimentales habiendo si ya iniciado el proceso; Asimismo “la modificatoria del artículo 5 numeral 8 restringir la procedencia de las demandas de Amparo contra resoluciones del Jurado Nacional de elecciones” y siendo su variación posterior no se aplica al proceso en comento.

De los hechos probados del proceso, se evidencia que cuando el JNE remitió a la RENIEC el Oficio N.º 0175-2006-SG/JNE (18/01/2006), el JNE tenía discernimiento absoluto el juicio penal continuado contra el demandante se estaba tramitando, asimismo

que la resolución establecida por el Vocal Lara Benavides era nula y por lo tanto no preexistía alguna sentencia de proceso penal consentida o ejecutoriada que condenase al ahora demandante a pena privativa de libertad; siendo así se vulneró su derecho a elegir y a ser elegido.

Finalmente, nuestro Tribunal estimó la demanda, determinando nula la Resolución N.º 156-2005- JNE, y demás resoluciones que atentaban contra sus derechos.

Conviene precisar que en la presente Stcia., también se esbozó la vulneración al derecho a la identidad por parte de la RENIEC, quien dando cumplimiento a lo dispuesto por el JNE, anuló su inscripción, quedando como un ciudadano NN, siendo que posteriormente la RENIEC subsanó su error.

Pese a que la Sentencia fue declarada fundada, el Sr. Castillo Chirinos no fue acreditado por el JNE, como alcalde, razón por la cual siguieron vulnerándose sus derechos; razón por la cual el 18 de abril de 2007 se presentó solicitud ante la CIDH, la cual fue aprobada electrónicamente por la Comisión el 16 de septiembre de 2018, conforme consta en el Informe No. 101/18 petición 476-07 - informe de admisibilidad, la cual fue declarada admisible en relación a “los artículos 8, 11, 23, 25 y 26 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana”, siendo este su último estado procesal a la fecha de sustentación de la presente tesis.

#### **- EXP. N.º 5854-2005-PA/TC**

Esta sentencia constituye un precedente vinculante, emitido en noviembre de 2005; en atención a la acción de amparo contra el JNE, presentada por Lizana Puelles, a fin de que se determine nula la Resolución N.º 315-2004-JNE, de 17/11/2004 por vulnerar el íntegro proceso; por cuando a través del acuerdo de Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Canchaque-Piura de 20 de julio de 2004, se determinó no procedente el requerimiento de vacancia del cargo de Alcalde, por supuesta concurrencia de nepotismo, aduciendo el recurrente que con la misma se agota la vía administrativa, no siendo factible que en apelación el JNE, se pronuncie, pues correspondía la acción contenciosa administrativa; pese a ello el JNE estimó un recurso de apelación interpuesto, disponiendo su vacancia automática en el cargo de Alcalde.

Al respecto el Procurador del JNE indica que el inc. 6) del art. 178° de nuestra carta magna y el artículo 23° de la LOM, establece como facultad del JNE determinar la vacancia de las personas elegidas en cargos de representación popular mediante sufragio directo; y faculta JNE a resolver el recurso de apelación presentado frente al acuerdo del Concejo Municipal que decide el requerimiento de vacancia; habiéndose probado el nepotismo, correspondía ser vacado; asimismo, que se transgreden los art.142° y 181° de nuestra carta suprema que prescriben la improcedencia de algún recurso frente a las resoluciones dictadas por el JNE.

El punto controvertido se genera por la imposibilidad de revisión judicial establecida en los artículos 142 y 181 de nuestra constitución que avalan a una resolución del JNE como un área exceptuada de control constitucional, limitando la revisión de validez constitucional mediante un amparo.

Para el TC es necesario merituar el lado preceptivo de la constitución se materializa al determinar que esta es norma suprema a nivel objetivo estructural (art. 51), como a nivel subjetivo institucional (art. 38), por lo cual ninguna persona puede transgredirla y los poderes públicos no pueden alejarse de sus preceptos (art.45).

Así mismo, el refrendo constitucional radica en que para cada derecho, valor o principio imbuido en la Constitución o que inspire la misma, le asiste una garantía Jurisdiccional para protegerlo (artículo 200° de la Constitución), siendo la máxima garantía la obligatoriedad del respeto a los derechos. Estando a ello, es que nuestro supremo Tribunal como garante de la Constitución, tiene la función de resolver en última o única instancia cada proceso en que se haya denegado el cumplimiento y respecto a un derecho fundamental (artículo 202 de la Constitución) todo ello acorde a su Ley Orgánica.

Al respecto, conviene recordar los Principios de Interpretación Constitucional, que señalan:

- Unidad de la Constitución. La Constitución no es solo una norma, es un ordenamiento jurídico en su misma, por ello todo lo que contiene y la inspira tiene coherencia, nada está aislado. Por ello la actuación estatal esta acorde a las necesidades de los ciudadanos.



- Concordancia Práctica. Los principios no colisionan entre sí, al menos no el contenido constitucionalmente protegido, por lo cual no es necesario sacrificar un derecho por otro, sino optimizar o potenciar su interpretación concordante.
- Corrección Funcional. Los poderes públicos no pueden ver menoscabadas sus funciones o atribuciones por la labor interpretativa.
- Función Integradora. La labor de la administración pública está al servicio de la sociedad, y debe respetar los derechos de las personas, la interpretación debe ser íntegra y pacífica.
- Principio de Fuerza Normativa de la Constitución. la interpretación se orienta a respetar a la Constitución como norma jurídica vinculante en su integridad por parte de los poderes públicos y sociedad en conjunto”.

El Tribunal recalca que la aislada interpretación de los artículos de la Constitución, lleva a inferir erróneamente que el JNE no puede ser cuestionado, impidiendo la optimización de los principios y del contenido de cada derecho; desconociendo equívocamente que el poder es limitado, lo cual versa también sobre los actos emitidos por el JNE, siendo que el TC, es el contralor de la Constitución; contrario sensu, se entiende que los actos que mite son autárquicos, sin sujeción alguna a control constitucional.

A través de los tratados internacionales se ha establecido que cada Estado debe garantizar la pronta justicia mediante recursos céleres y sencillos, a fin de resguardar los derechos de las personas (Ejm: art. 8.1, Art. 25.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos)”, Al respecto el Tribunal Constitucional, establece:

*“...La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de condenar y sancionar a Estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, justamente, por permitir que sus máximos órganos jurisdiccionales electorales se encuentren exentos de un control jurisdiccional frente a aquellas decisiones que contravengan los derechos fundamentales de las personas, como el caso Yatama vs. Nicaragua”*

En el “Informe N.º 119/99, caso 11.428, Susana Higuchi Miyagawa (Perú), del 6 de octubre de 1999, párrafo 55”, precisó:

*“Adoptar las medidas tendentes a modificar las disposiciones de los artículos 181 de la Constitución de 1993 y 13 de la Ley Orgánica Electoral, posibilitando un*

*recurso sencillo y efectivo, en los términos del artículo 25 de la Convención, contra las decisiones del JNE que vulneren la garantía a la participación política por parte de los ciudadanos”.*

Por último, estando a los plazos terminantes y preclusivos y a fin de que la población conozca oportunamente los resultados del proceso, es que es necesaria la celeridad del recurso y que este no interfiera con el calendario electoral.

Es así que, según el Tribunal Constitucional, esta demanda en comentario debió ser atendida mediante un proceso contencioso administrativo, y no por el JNE, atendiendo a que según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el acuerdo de Concejo que declara y rechaza la vacancia puede ser reconsiderado, de igual forma, apelable, apelación que se debe interponer ante el Concejo quien debe elevarlo al JNE a fin de ser resuelto en el plazo de 30 días, correspondiéndole al JNE la competencia para resolver en apelación; por lo cual el TC, declara INFUNDADA la demanda.

Así mismo, el TC, recalca que cualquier interpretación que excluya un proceso o órgano del control constitucional mediante el amparo, es interpretación inconstitucional, por lo cual la citada demanda será procedente, aunque verse sobre una decisión emanada por el JNE.

Siendo efecto inmediato de la dación del precedente que todos los jueces y tribunales del Perú, se encuentran vinculados por este criterio y bajo responsabilidad.

Asimismo, precisa que, si se presentase un amparo en el contexto de un cronograma electoral, y este no fuere resuelto oportunamente, sólo se determinarían las responsabilidades de ley, de conformidad con el artículo 1º del CP Const.,

De la misma manera, en virtud al art. 107º de nuestra Carta Magna, el TC propone al Congreso: “la reducción sustancial el plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral; que las demandas de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral se presenten ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema; y cuyas resoluciones denegatorias, emitidas en un plazo sumárisimo, puedan ser conocidas por el Tribunal Constitucional, mediante la

interposición de un recurso de agravio constitucional a ser resuelto también en tiempo perentorio”. En ese sentido hemos viabilizado la propuesta de la presente investigación.

- **EXP. N.º 2366-2003-AA/TC**

La sentencia emitida en este expediente es la primera en la cual el TC, precisa la procedibilidad del amparo contra resoluciones electorales; si bien la demanda no estima la pretensión, nuestro supremo Tribunal aprovecha el contexto en que este amparo llegó a su conocimiento, vía agravio constitucional, a fin de precisar que:

*“no cabe invocar la existencia de campos de invulnerabilidad absoluta al control constitucional, so pretexto de que la Constitución confiere una suerte de protección especial a determinadas resoluciones emitidas por parte de determinados organismos electorales. En efecto, aun cuando de los artículos 142º y 181º de la Norma Fundamental, se desprende que en materia electoral no cabe revisión judicial de las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, y que tal organismo representa la última instancia en tal asunto, dicho criterio sólo puede considerarse como válido en tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en forma debida o, lo que es lo mismo, compatibles con el cuadro de valores materiales reconocido por la misma Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de una forma que resulte intolerable para la vigencia de los derechos fundamentales o quebrante los principios esenciales que informan el ordenamiento constitucional, no sólo resulta legítimo sino plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando éste resulta viable en mecanismos como el amparo (fundamento 4)”.*

Es de resaltar que la sentencia determina la irreparabilidad de los derechos vulnerados (pues la elección ya se había llevado a cabo, sin que el demandante pueda postular) por lo cual es declarada infundada; y en razón a la Ley N.º 23506, vigente en ese momento, remite copias certificadas al Ministerio Público, para que actúe conforme a su competencia.

**Expedientes improcedentes por “sustracción de la materia” ante demora en la tramitación:**

- **“EXP N.º 00025-2014-PA/TC”**, la demanda es de fecha 23 de noviembre de 2009, recién el 27 de mayo de 2013 es declarada infundada (1era instancia), el 25 de setiembre de 2013 es declarada improcedente (2da instancia), el RAC fue emitido 2 de junio de 2015; es decir aproximadamente 5 años y medio, luego de interpuesta la demanda, y tratándose de un pedido de vacancia, este fue resuelto cuando el

periodo del alcalde cuya vacancia se solicitó, ya había culminado, declarándose improcedente por sustracción de la materia. Con lo cual se advierte dilación en la tramitación del proceso de amparo, pese a la celeridad que debe caracterizar estos procesos constitucionales.

- **“EXP N.º 01920-2013-PA/TC”**, la demanda presentada el 21 de junio de 2012, su escrito subsanatorio el 6 de julio de 2012, el 3 de septiembre 2012, se resolvió infundada la demanda (1era instancia), el 15 de marzo de 2013 la Sala revisora resolvió confirmar la sentencia recurrida, siendo que el 27 de mayo 2015, la demanda fue declarada improcedente, sin embargo culminó el mandato de elección popular, sobre el cual se había decidido vacar al alcalde, siendo que cuando se resolvió su recurso de agravio constitucional, ya había culminado el periodo para el cual fue elegido, declarándose improcedente la demanda. Siendo así, se evidencia demora en la tramitación, pese a la celeridad que debe caracterizar estos procesos constitucionales.
- **“EXP N.º 01747-2014-PA/TC”**, la demanda fue interpuesta el 18 de diciembre de 2012, el 2 de setiembre de 2012 se resolvió declarar infundada la demanda (1era instancia), en enero 2014 la Sala revisora confirmó la recurrida, siendo que el 27 de mayo 2015, la demanda de amparo fue declarada infundada; sin embargo culminó el mandato de elección popular, sobre el cual se había decidido vacar al alcalde, siendo que cuando se resolvió su RAC, ya había culminado el periodo para el cual fue elegido, declarándose improcedente por sustracción de la materia, pues el periodo para el cual el demandante había sido alcalde había culminado (2011-2014). Siendo así se evidencia que la demora en la tramitación del proceso de amparo, pese a la celeridad que debe caracterizar estos procesos constitucionales.

### **Presentación del modelo teórico.**

El Proceso de amparo contra resoluciones del JNE debe ser tramitado sólo ante el Tribunal Constitucional pues se encuentra supeditado a su interpretación constitucional, y al ser instancia única se puede atender con celeridad procesal, dado el corto cronograma electoral o la necesaria celeridad de pronunciamiento en relación a la legitimidad de las autoridades elegidas; asimismo, si estas resoluciones son revisadas por el Poder Judicial se vulnera la independencia del Jurado Nacional de Elecciones, dado que ambos tienen

independencia en su función jurisdiccional, no encontrándose el Poder Judicial en supremacía frente al JNE.

Con la finalidad de efectivizar este proceso de amparo electoral en única instancia ante el TC, se debe adicionar a nuestra Carta Magna, en su art. 202° inc.3: “Conocer los procesos de amparo contra resoluciones jurisdiccionales emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones”, lo cual también se puede adicionar vía interpretación constitucional.

Del mismo modo, se debe adicionar al “Código Procesal Constitucional” la tramitación del presente proceso, proponiendo que sea así:

### **Proceso de Amparo contra resoluciones emitidas por el JNE**

**“Finalidad.** – La defensa de los derechos fundamentales de las personas, cuando la decisión emitida por el JNE haya causado agravio, directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo; reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional,

**Procedencia de la demanda.** - Procede contra las resoluciones jurisdiccionales o administrativas, siempre que infrinjan la Constitución vulnerando derechos fundamentales.

**Conexidad de los efectos de la demanda declarada fundada.** - La sentencia que declare fundada la demanda de amparo contra resoluciones emitidas por el JNE, declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia.

**Plazo de interposición de la demanda.** - El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los diez días hábiles de que la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones haya quedado firme, no siendo necesario agotar la vía previa.

**Improcedencia liminar.** - Si el Tribunal Constitucional al calificar la demanda de amparo contra resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones considera que ella resulta manifiestamente improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión; no siendo factible apelar esta decisión.

**Inadmisibilidad.** - Si el Tribunal Constitucional declara inadmisibile la demanda, concederá al demandante dos días para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente; no siendo factible apelar esta decisión.

**Acumulación de procesos y resolución inimpugnable** - Cuando una misma resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones amenace o afecte el interés de varias personas que han ejercido separadamente su derecho de acción, el Tribunal Constitucional a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la acumulación de los procesos de amparo. La resolución que concede o deniega la acumulación es inimpugnable.

**Competencia.** - El Tribunal Constitucional es competente para conocer del proceso de amparo contra resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, siendo la única instancia nacional capaz de anular total o parcialmente las resoluciones que vulneren derechos fundamentales. El plazo para resolver no excederá de cinco días desde la interposición de la demanda.

**Impedimentos.** - El miembro del TC deberá abstenerse cuando concurran las causales de impedimento previstas en el Código Procesal Civil. En ningún caso será procedente la recusación.

**Trámite.** - La resolución que admite la demanda, concederá al demandado el plazo de cinco días para que conteste, siendo que hasta el día tercero tendrá la posibilidad de solicitar informe oral, el cual se llevará a cabo como máximo el día quinto, estando al horario de audiencia disponible. Dentro de cinco días de contestada la demanda, o de vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal Constitucional expedirá sentencia. Si se presentan excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto admisorio, el Tribunal Constitucional dará traslado al demandante por el plazo de dos días; con la absolución o vencido el plazo para hacerlo, dictará un Auto de Saneamiento Procesal en el que se anule lo actuado y se dé por concluido el proceso, en el caso de que se amporen las excepciones de incompetencia, litispendencia, cosa juzgada y caducidad. Si el Tribunal Constitucional lo considera necesario, realizará las actuaciones que considere indispensables, sin notificación previa a las partes. Inclusive, puede citar a audiencia única a las partes y a sus abogados para realizar los esclarecimientos que estime necesarios.

El Tribunal Constitucional expedirá sentencia en la misma audiencia o, excepcionalmente, en un plazo que no excederá los cinco días de concluida ésta.

El Juez en el auto de saneamiento, si considera que la relación procesal tiene un defecto subsanable, concederá un plazo de dos días al demandante para que lo subsane, vencido el cual expedirá una sentencia. En los demás casos, expedirá sentencia pronunciándose sobre el mérito.

Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio, o que se asimilen a cualquiera de los casos previstos en el artículo 112 del Código Procesal Civil, serán sancionados con una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal. Dicha sanción no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera derivarse del mismo acto.”

En el caso de la intervención litisconsorcial, contenido de la sentencia fundada, costas y costos, ejecución de sentencia, procedimiento para represión de actos homogéneos, será aplicable las disposiciones

## **Conclusiones**

1. El Jurado Nacional de Elecciones, tiene la exclusividad de la función jurisdiccional electoral para administrar justicia electoral, no sólo en un proceso electoral instaurado, sino todas las emitidas en dicha materia, tales como el proceso de vacancia, asimismo sobre las decisiones emitidas por los demás integrantes del sistema electoral.
2. Toda Acción de Amparo ante resoluciones emitidas por el JNE resulta procedente cuando se afecte derechos fundamentales, pues “no existe zona exenta de control constitucional”, por lo cual puede ser revisada mediante esta garantía constitucional, a fin de certificar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.
3. Si bien el Poder Judicial es uno de los tres poderes del estado, y tiene competencia en ambas instancias para los amparos, conforme lo señala el Cód. Proc. Constitucional, en el caso de acciones de amparo contra resoluciones emitidas por el JNE, organismo constitucionalmente autónomo, el Poder Judicial no resulta competente, pues al igual que el JNE, se encuentra sometido al control e interpretación constitucional.
4. Nuestro Supremo Tribunal Constitucional es el órgano nacional único competente para tramitar el amparo electoral, por cuanto es el guardián de los Derechos Fundamentales, ante el cual “no existen zonas exentas de control constitucional”, cuenta con autonomía procesal, puede llevar a cabo de manera célere el análisis de la controversia y determinar si existió o no afectación a sus derechos fundamentales, restituyendo las cosas al estado anterior a la vulneración o determinando responsabilidades; por lo cual el Proceso de amparo electoral debe tramitarse exclusivamente ante el Tribunal Constitucional.



## **Recomendaciones**

Se recomienda remitir la presente investigación al “Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional”, a fin de que el Pleno del TC, en el uso de su autonomía evalúe la propuesta, a fin de que sea implementada vía interpretación Constitucional.

Se recomienda presentar la propuesta al “Congreso de la República”, a fin de que realice la modificación legislativa propuesta.

Se recomienda remitir la presente investigación a la “Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones”, con la finalidad de que se estudie y oportunamente se derive al pleno, a fin de que emitan las resoluciones respectivas para su adecuación.

## Referencias Bibliográficas

### BIBLIOGRAFÍA

- Abad Yupanqui, Samuel B. (1996). *El proceso constitucional de amparo en el Perú: un análisis desde la teoría general del proceso*. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [S.l.], jan. 1996. ISSN 2448-4873. Disponible en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3401/3964>
- Adrianzén Carreño, Javier Ildefonso (2015). Fundamentos del Tribunal Constitucional para anular las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. (Tesis de doctorado de la Universidad Nacional de Trujillo. Repositorio. [http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5718/TESIS%20DOCTORAL\\_JAVIER%20ILDEFONSO%20ADRIANZEN%20CARRE%c3%91O.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5718/TESIS%20DOCTORAL_JAVIER%20ILDEFONSO%20ADRIANZEN%20CARRE%c3%91O.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Albaladejo, Manuel. (1997). *Compendio de Derecho Civil*. 10 Edición. Barcelona; España: BOSCH.
- Beraun, Max y Mantari, Manuel. (2003). *Visión Tridimensional Del Debido Proceso: definición e historia*. Lima.
- Bernal Cárdenas, C. A. (2016). *La jurisdicción electoral en el Perú: Un análisis Constitucional en Aplicación del Principio de Exclusividad de la Función Jurisdiccional, 2015*. Repositorio. [https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM\\_6890142a1262977505ac6fdb252a6181](https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM_6890142a1262977505ac6fdb252a6181)
- Bustamante Alarcón, Reynaldo. (2001). *Derechos Fundamentales y Proceso Justo*. Lima: Ara Editores.
- Carrión Lugo, Jorge. (2004). *Tratado de Derecho Procesal Civil*. Lima: Editorial Grigley.
- Castañeda Otsu, Susana (2010). *Comentarios a los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional*. Lima. Editorial Grigley.
- Chamorro Bernal, Francisco. (1994). *La Tutela Judicial Efectiva*. Barcelona: Editorial BOSCH.
- Chanamé Orbe, Raúl. (2009). *Manual de Derecho Constitucional – derecho, elementos e instituciones constitucionales*. Arequipa – Perú. Editorial ADRUS.
- Córdova Schaefer, Jesús. (2009). *Teoría general del derecho constitucional*. 1era edición. Lima: Ediciones Caballero Bustamante S.A.C.

- Couture, Eduardo J. (1985). *Fundamentos de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
- Cubas Villanueva, Víctor. (2000). *Constitución, Proceso y Poder Político*. Lima: Palestra Editores.
- De Bernardis, Luis Marcelo. (1985). *La Garantía Procesal del Debido Proceso*. Lima: Cultural Cusco S.A. Editores.
- Donayre Montesinos, Christian (2010), En defensa del amparo electoral y organismos constitucionales, España: Palestra Editores. Recuperado de <https://www.yumpu.com/es/document/view/59111303/108-dg-21-donayre>
- Dueñas, R. (2017). *Una adecuada organización de los órganos jurisdiccionales en la justicia constitucional desde los principios del buen gobierno para mejorar el amparo en el Perú* (Trabajo académico para el grado de segunda especialidad). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. [http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8569/DUENAS\\_ROY\\_Recurso%20de%20Amparo.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8569/DUENAS_ROY_Recurso%20de%20Amparo.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Edwards, Carlos Enrique. (1996). *Garantías Constitucionales en Materia Penal*. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- EGACAL – Escuela de Graduandos Aguila & Calderón (2010). *El derecho constitucional y procesal constitucional*. Lima: Editorial San Marcos
- Eguiguren Praeli, Francisco (2002). *Estudios Constitucionales*. Lima: ARA Editores.
- Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy. (2003). *Jurisdicción Constitucional Importación de Justicia y Debido Proceso*. 1ra. Edición. Lima: Ed. ARA Editores.
- Eto Cruz, Gerardo (2011). *Horizontes contemporáneos del Derecho Procesal Constitucional* – tomo II. 1era Edición. Lima: Editorial ADRUS.
- Eto Cruz, G. (2009). El rol de los principios procesales en la actuación del juez constitucional. *Revista Gaceta Constitucional*.
- Eto Cruz, Gerardo (2008). *El desarrollo del derecho procesal constitucional a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano*. Centro de Estudios Constitucionales, Lima.
- Gonzáles Pérez, Jesús. (2001). *El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva*. Segunda Edición. España. Editorial Civitas.
- Gutiérrez Camacho, Walter. (2005). *La Constitución Comentada*. Lima: Gaceta Editores.

- Gutiérrez Camacho, Walter. (1995). *La razonabilidad de las Leyes y otros Actos de Poder*. En: *Diálogo con la Jurisprudencia*. Revista de Crítica y Análisis Jurisprudencial. Año I, No. 1. Lima: Gaceta Editores.
- Häberle, Peter. (1997). *La libertad fundamental en el Estado Constitucional*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Landa, C. (2018). *Derecho Procesal Constitucional*. Fondo Editorial. Recuperado de <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170693/36%20Derecho%20procesal%20con%20sello.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Landa Arroyo, César (2006). *Constitución y fuentes del derecho*. Lima. Palestra Editores.
- Leyton Falen, Maria Josefa (2017) *El sistema electoral y la garantía de gobernabilidad, democracia, eficiencia y eficacia de los procesos electorales en el Perú*. (Tesis de doctorado de la Universidad San Martín de Porres). Repositorio. [http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/3825/leyton\\_fmj.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/3825/leyton_fmj.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Maurino, Alberto L. (1985). *Nulidades procesales*. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- Mena Adame, Carlos (2002). *La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional*. UNAM (tesis que para obtener el grado de Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México). Repositorio. [https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-como-tribunal-constitucional-82980?c=ea1qQe&d=true&q=\\*&i=2&v=1&t=search\\_0&as=0](https://repositorio.unam.mx/contenidos/la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-como-tribunal-constitucional-82980?c=ea1qQe&d=true&q=*&i=2&v=1&t=search_0&as=0)
- Mendoza Ramírez, Enrique Javier. (2007). *Sobre la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones*”. *Revista Oficial del Poder Judicial*. Recuperado de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ff8fa28043eb7b79a6a1e74684c6236a/4+Doctrina+Nacional++Magistrados++Mendoza+Ram%C3%ADrez.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ff8fa28043eb7b79a6a1e74684c6236a>
- Monroy Gálvez, Juan. (1996). *Introducción al proceso Civil*. Bogota: Editorial Themis S.A
- Obando Blanco, Víctor Roberto. (2001). *El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la jurisprudencia*. Lima. Palestra editores.
- Olivera Vanini, Jorge. (2000) *Fundamentos del debido proceso*. Artículo publicado en Conferencia episcopal de acción social. Lima: Perú Textos.
- Quiroga León, Aníbal. (2003). *El Debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos*. Lima: Editorial Jurista Editores.

- Ramos Bohorquez, Miguel. (2005). *Constitución Política del Perú. Comentada y Analizada*. Lima: Editorial Berrio.
- Salcedo Cuadros, C. M. (2006) La inconstitucionalidad de las normas sobre vacancia de autoridades regionales y municipales Apuntes a propósito de la vacancia del alcalde Castillo Chirinos. *Actualidad Jurídica*; Editorial Gaceta Jurídica; N° 155; Octubre 2006. Lima.
- Sánchez Díaz, María Fernanda (2008) El tribunal constitucional como protector permanente de la supremacía constitucional. (Tesis de pregrado de la Universidad Autónoma de México). Repositorio. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5145/20.pdf>
- San Martin Castro, César. (2006). *Derecho procesal penal*. V. 1. 2da. Edición. Grijley, Lima.
- Ticona Postigo, Víctor. (1999). *El debido proceso y la demanda civil*. 2º Edición. Lima: Rodhas.
- Garcia Belaunde, Domingo. (2001) *Derecho procesal constitucional*. Editorial TEMIS, Bogotá.
- García Soriano, María Vicenta. (1999). *Elementos del Derecho Electoral*. Valencia: Tirant lo blanch.
- Häberle, Peter (1997). *La libertad fundamental en el Estado Constitucional*. Lima: Fondo Editorial PUCP- Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional.
- Hesse, Konrad (1983). *Escritos de Derecho Constitucional*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Landa, César. (2007). *Tribunal Constitucional y Estado Democrático*, 3.<sup>a</sup> ed. Lima: Palestra.
- Ruiz Riquero, José Humberto (2012). *La aplicación de la teoría del precedente vinculante norteamericano en el Perú y sus repercusiones jurisprudenciales*. (Tesis para optar por el grado de Abogado en derecho, USAT). Repositorio. [http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/278/1/TL\\_RuizRiqueroJose.pdf](http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/278/1/TL_RuizRiqueroJose.pdf)
- Ticona Postigo, Víctor. (1995). *Análisis Y Comentarios Al Código Procesal Civil*. Tomo I. Segunda edición. Lima: Editorial Grijley.
- Valencia Cahuaya Wendy Helen (2017). Necesidad de un Amparo Electoral para el fortalecimiento de la Jurisdicción Electoral Peruana (Tesis de pregrado de la Universidad Ricardo Palma). Repositorio. <https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1132/TESIS-Wendy%20Helen%20Valencia%20Cahuaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Valle Riestra, J. (2004). Código Procesal Constitucional. Ediciones Jurídicas. Lima

## ARTICULOS

- Abad Yupanqui, Samuel. El proceso de amparo en materia electoral. En: *Revista Elecciones*, Año 1, N° 1, noviembre 2002, ONPE, Lima. CHOCANO
- Castañeda Otsu, Susana. Control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Escuela de Post Grado – UNPRG, Marzo de 2013.
- Colombo Campbell, Juan. Funciones del Derecho Procesal Constitucional, *Ius et Praxis*, 24 de enero de 2013.
- Pinto, Mónica. Las instituciones supranacionales y el rule of law en Estado de derecho y democracia. Argentina: Editores del Puerto s.r.l, Mayo de 2001.
- Falconí Gálvez, J. (2006). JNE: TC no puede revisar nuestras resoluciones. Artículo publicado en el Diario La República. Domingo, 06 de agosto de 2006.
- Landa, César. (1994). Justicia constitucional y political question en Pensamiento constitucional. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Landa, César. (2006). Tribunal Constitucional y Poder Judicial: Una perspectiva desde el Derecho Procesal Constitucional en Constitución y Fuentes del Derecho. Lima: Palestra.

## LINKOGRAFIA

- Colombo Campbell, Juan. *Funciones del derecho procesal constitucional*, en [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-00122002000200002](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200002), ubicado el 03 de noviembre de 2014.
- Eto Cruz, Gerardo. *Tribunal Constitucional vs. Poder Judicial*, en <http://www.galeon.com/donaires/REVISTA7/tribunal.htm>, ubicado el 03 de noviembre de 2014.
- Figueroa Gutarra, Edwin. *Limites a la justicia constitucional*, en <http://edwinfigueroag.wordpress.com/%C2%BFlimites-a-la-justicia-constitucional/>, ubicado el 03 de noviembre de 2014.
- Figueroa Gutarra, Edwin. *Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional*, en <http://edwinfigueroag.wordpress.com/2012/07/25/poder-judicial-vs-tribunal-constitucional-articulo-y-enlace-pdf/>, ubicado el 03 de noviembre de 2014.
- Quiroga León, Aníbal. *El derecho procesal constitucional y los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional*, en

<http://blog.pucp.edu.pe/item/168297/el-derecho-procesal-constitucional-y-los-precedentes-vinculantes-del-tribunal-constitucional>, ubicado el 03 de noviembre de 2014.

- Robles Moreno, Carmen del Pilar. *Los limites al Tribunal Constitucional Peruano*, en <http://blog.pucp.edu.pe/item/19858/los-limites-al-tribunal-constitucional-peruano> ubicado el 03 de noviembre de 2014.
- Salcedo Cuadros, Carlo Magno. *El Tribunal Constitucional contra el absolutismo electoral*, en <http://blog.pucp.edu.pe/item/15758/el-tribunal-constitucional-contra-el-absolutismo-electoral>, ubicado el 03 de noviembre de 2014.

## LEGISLACION INTERNACIONAL Y NACIONAL

### INTERNACIONAL

- Convención Americana de Derechos Humanos en [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_B-32\\_Convencion\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm)
- Declaración Universal de los Derechos Humanos en <http://www.un.org/es/documents/udhr/>
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp>
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en <http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>
- Informe No. 101/18 petición 476-07 - informe de admisibilidad <http://www.oea.org/es/cidh/decisiones/2018/PEAD476-07ES.pdf>
- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso Yatama vs. Nicaragua. Recuperado de [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_127\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf)
- Informe No 119/99 Caso Susana Higuchi Miyagawa – Perú de 6 de octubre de 1999. Recuperado de <https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Peru11.428.htm>

### NACIONAL

- Constitución Política del Perú, Sistema Peruano de Información Jurídica, recuperado de <http://spij.minjus.gob.pe/>
- Código Procesal Constitucional, Sistema Peruano de Información Jurídica, recuperado de <http://spij.minjus.gob.pe/>

- Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, recuperado de <http://www.jne.gob.pe>
- Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, recuperado de <http://www.tc.gob.pe/>

#### PRECEDENTES VINCULANTES Y SENTENCIAS

- Precedente Vinculante del TC, Exp. N° 5854-2005/PA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 07247-2013-PA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 5448-2011-PA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 0007-2007-PI/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 2730-2006-PA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 2746-2006-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 3285-2006-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 3317-2006-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 6649-2006-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 6901-2006-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 1365-2005-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 4773-2005-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 5396-2005-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 7632-2005-AA/TC;
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 0252-2004-AA/TC;
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 0571-2004-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 2668-2004-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 3981-2004-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 4543-2004-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 2366-2003-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 1420-2002-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 1804-2002-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 2119-2002-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 2346-2002-AA/TC.
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N.º 0971-1998-AA/TC
- Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N. STC N.º 0033-1995-AA/TC